

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia  
JUZGADO : 5° Juzgado Civil de Santiago  
CAUSA ROL : C-1619-2023  
CARATULADO : BARRA/FISCO DE CHILE

Santiago, once de Julio de dos mil veinticuatro

**VISTOS:**

Con fecha 30 de enero de 2023, a folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, domiciliado en Dr. Sótero del Río N° 326, oficina 1104, comuna de Santiago, en representación de don Sergio Andrés Barra Rosales, pensionado, con domicilio en calle Yelcho N° 174, comuna de San Bernardo; don Enrique Antonio Barra Rosales, pensionado, domiciliado en Industria N° 1675, comuna de San Bernardo; don Modesto Barra Rosales, pensionado, domiciliado en Maestranza N° 298, comuna de San Bernardo; don Ricardo Federico Barra Rosales, trabajador de la construcción, domiciliado en pasaje Melli N° 1902, Altos de Pucalán, comuna de Pichilemu; y doña Susana Ximena Barra Rosales, técnico en párvulos, domiciliada en Trapilhue N° 752, comuna de Ñuñoa; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, representado por el Presidente del Consejo de Defensa del Estado, don Juan Antonio Peribonio Poduje, abogado, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4, comuna de Santiago.

Testimonio de don Sergio Barra Rosales: “Mi nombre es Sergio Barra Rosales, nací el 18 de septiembre de 1948 y actualmente tengo 73 años. Soy hermano de Jenny Barra Rosales, asesinada por agentes estatales durante la dictadura militar.

Al hacer un relato del secuestro, desaparición y asesinato de mi hermana no es algo que sea fácil de recordar y contar cómo nos afectó



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



como familia, cómo y por qué desapareció solo por pensar diferente. Cuesta contar y recordar cómo nos cambió la vida de golpe en estos casi 45 años, pensando que algún día se tendría justicia.

Desde que mi hermana desaparece, mi padre se encerró en sus propios pensamientos, sin entender qué pasaba, sin un consuelo hasta el día de su muerte que ocurre el 15 de diciembre del 2015. Murió sin respuestas, con pura tristeza. Mi madre tomó la delantera en la búsqueda de Jenny, a pesar de todos los problemas que teníamos como familia: la miseria por la falta de trabajo y el cambio de casa. Mi mamá era una mujer fuerte, recuerdo verla cuando en la Corte de Apelaciones de San Miguel se nos notificó como familia que habían encontrado dos huesitos de Jenny y que con eso habían podido identificarla, saliendo así de su condición de detenida desaparecida. La imagen de mis padres mirando el único hueso que podían tener en la mano de su hija, esa escena terrible no se me pudo borrar nunca más de la mente y no se paga con todo el oro del mundo. Era un desconcierto, ninguno entendía qué fue lo que pasó. Pensar que los asesinos a esta fecha son unos ancianos y otros ya están muertos, impunes, porque para pagar por el crimen de Jenny que vivir más de 500 años.

Todo este engaño de la justicia que hemos vivido como familia no puede pagar, el sufrimiento de una familia marcada por la desaparición y asesinato de Jenny nos marcó a todos, en todos los sentidos que puede contemplar el ser humano. En mi caso la desaparición de Jenny me marcó hasta el día de hoy, es por eso que no hablo de esto con ninguna persona. Para el tiempo que la desaparecieron yo recién me había casado y estaba estudiante Economía en la Universidad de Chile, además trabajaba en Ferrocarriles del Estado en la comuna de Estación Central y teníamos una hija recién nacida. Lo que pasó significó un miedo enorme, y persecución en la universidad y en mi trabajo, lo que generó cambiamos de casa en



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



varias ocasiones.

Yo empecé a desconfiar de todos, no quedaron amigos, constantemente se cambia de rutina para llegar a la casa de la familia por temor a ser abordado por los agentes de inteligencia. Vivíamos aterrados. Finalmente tuve que dejar la universidad por la persecución, y en el trabajo de la alguna manera se supo que era familiar de una detenida desaparecida y se me discriminó. En otras palabras, se me marcó a pesar de no ser político de ningún color. Esto me afectó el sueldo y recibí un trato discriminatorio, además me cambiaron constantemente de trabajo de un lugar a otro, y yo por necesidad tuve que aguantar este maltrato.

Por todo el estrés, también me vinieron enfermedades al estómago, úlceras y neurosis. Sin encontrar consuelo, siempre enfermo a los nervios y al estómago, con dolores de cabeza, días si poder dormir, gastos en medicamentos y médicos, pero sin resultado. Y a eso agregarle el problema del dinero, ¿cómo ayudar a la familia sin dinero? En mi casa, junto a mi esposa, dos niños y mi suegra, hubo mucha miseria, amargura y tristeza. Como persona caminé siempre a la defensiva cuidando las cosas, hasta el día de hoy.

Lo más terrible fue vivir viendo cómo se pasó el tiempo y no hubo un resultado positivo en la búsqueda de justicia, en saber qué fue lo que pasó y quienes la mataron. Fue amargo y triste cómo mi papá y mi mamá se fueron apagando en su vida sin entender que había pasado con su hija; primero de no saber el paradero y después saber que la habían asesinado, dinamitado y lanzado al mar, solo por pensar distinto.

Todo lo que se ha sufrido como familia no tiene un precio, se nos marcó a fuego. Por no tener recursos se nos ha invisibilizado, y más terrible es volver a recordar y abrir las heridas nuevamente”.

Testimonio de don Enrique Antonio Barra Rosales: “Mi nombre es



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Enrique Antonio Barra Rosales, nací el 9 de agosto de 1950 y actualmente tengo 71 años. Tenía 23 años cuando ocurre la primera detención de Jenny en enero de 1974. Yo trabaja y estudiaba en la escuela nocturna para sacar el cuarto medio. Recuerdo que ese día estaba en la casa cuando los militares golpearon la puerta y fui abrir. Vi a un boina negra armado hasta los dientes en la puerta, mientras tanto otros militares ya habían saltado el muro y ya estaban dentro de la casa. Preguntó por Jenny, dijo que solo le iban a hacer unas preguntas. Yo fui a buscar una frazada para entregársela a Jenny, mientras tanto los militares en el pasaje buscaban y abrían los alcantarillados buscando armas. De acuerdo a lo vio una vecina y después nos contó, había tanquetas y camiones apostados en la calle, que estaba acordonada. Al otro día salí muy temprano con mi mamá a buscar a Jenny. Fuimos a la Cruz Roja Internacional ubicada en Bustamante, donde denunciarnos la detención de Jenny. Recuerdo que de consuelo nos dieron chocolates, harina y galletas.

Al mes de lo ocurrido nos enteramos que Jenny estaba en la Cárcel de Mujeres. Esa semana no pude ir a trabajar por todo lo que estaba pasando, un día martes volví a mi trabajo y mi jefe me despidió, diciéndome que él no trabajaba con comunistas. Pasado el tiempo me lo volví a encontrar, cuando ya mi hermana había desaparecido y él me pidió disculpas. Ya no había nada que hacer si mi hermana ya estaba desaparecida.

Yo a nadie le decía que era comunista, lo llevaba guardado. Durante ese tiempo militaba en las Juventudes Comunistas, en una base que teníamos en la comuna de San Bernardo. Yo era el secretario político y debía velar y analizar la realidad política del país. Estaba confiado que Jenny no tenía miedo porque su camino era una forma de pensar y de vivir, mi hermana era fuerte.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Recuerdo que todos los días en la calle sufríamos seguimientos. Veía un Peugeot de color claro siempre estacionado siguiéndome a todas partes con 4 tipos adentro, eran de la DINA.

Luego comencé a trabajar y me casé. Cuando Jenny desaparece en octubre de 1977 yo me entero por una sobrina de mi esposa que la había visto en la calle de Santiago custodiada por dos hombres. Yo y mi hermano Modesto pedimos una reunión con el General Espinoza, solicitud que nunca fue contestada. Luego de un tiempo, y producto de las persecuciones, decido ir a trabajar por dos años al sur del país solo, en la construcción.

A mi hermana la secuestraron para matarla. Jenny nunca tuvo miedo y ella estaba convencida de lo que hacía estaba bien, era una niña estudiosa y buena. Los sábados y los domingos salíamos al parque. Ella llevaba sus libros, salíamos con los hermanos más pequeños y nuestros amigos y amigas, hacíamos viajes a la cordillera y a la playa. Yo me llevaba bien con Jenny, era el hermano más apegado a ella. Me acuerdo que me esperaba en la Plaza Almagro y nos juntábamos también con mi hermano Modesto a tomar once por ahí y luego yo la dejaba en la casa.

Cuando salía de la universidad, mi hermana se iba almorzar a mi casa y luego yo la iba a dejar. Hicieron desaparecer a gente joven estudiosa, yo tenía mucha pena, no hallaba qué hacer. Mi depresión era profunda, a veces me hacía el enfermo para no ir a trabajar, y salía a caminar. Caminaba y caminaba, me sentía muy triste y esto era muy difícil para mí.

Durante la unidad popular estudié en un curso especial en la Universidad de Chile, de construcción. Después que mi hermana desaparece se cierran las puertas en la universidad para mí y se cierran los programas.

Cuando entregaron los restos de Jenny, jamás pensé que iba a pasar esto. No tuve agallas para hablar, para decir nada. Me quebré tantas veces, siento mucho dolor. Se apagaron nuestros sueños a tan corta edad, es algo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



que no puedo relatar, que no puedo describir porque es muy fuerte. El daño a mí y a mi familia ha sido enorme, y nunca hemos tenido alivio. Tantos años para encontrar solo un par de huesos de ella, y no saber qué fue lo que le hicieron”.

Relato de don Modesto Barra Rosales: “Mi nombre es Modesto Barra Rosales, nací el 9 de septiembre de 1951. Soy hermano de Jenny del Carmen Barra Rosales. Para el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 yo tenía 19 años. Recuerdo que tiempo después, empezando el año 1974, nos allanaron la casa. Eran las 2 de la mañana cuando desperté con un soldado apuntando su fusil a mi cabeza. Me quede inmóvil. Después de revisar toda la casa se llevaron detenida a mi hermana Jenny. Según lo que le decían a mi madre, era para que Jenny declarara. A las semanas después supimos que estaba detenida en el cerro Chena, luego en la Cárcel de Mujeres, ubicada en el paradero N° 7 de Vicuña Mackenna. Después de 8 meses la dejaron en libertad, por ese entonces teníamos mucho miedo que los militares también vinieran por nosotros. En ese tiempo me fui a vivir con mi polola y mi hermano Enrique a otro lugar para poder protegernos. Siempre con mucho miedo ya que nos habíamos enterado de algunos crímenes contra compañeros.

El año 1976 me casé y nació mi primer hijo el año 1977. Mi hermana Jenny lo alcanza a conocer, pues ella desaparece más tarde el mismo año. La desaparición de Jenny fue terrible y dolorosa. Con Jenny éramos muy unidos, teníamos muchos amigos de juventud, para el golpe ya no estaban muchos de ellos, algunos se fueron al exilio, otros nos quedamos acá con mucho temor, escondidos, tratando de sobrevivir. Recuerdo a Jenny cuando era liceana, recuerdo a sus compañeras y recuerdo a toda la juventud que nos juntábamos esos años, los paseos a la cordillera, a la playa, todos los veranos, extraño mucho a Jenny, sentí mucho dolor, pero me



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



refugié en el trabajo y en mi familia.

Después de nacer mi hijo comencé a trabajar e inicié la carrera de Construcción Civil en la Universidad Católica, la cual estudiaba de noche y me titulé. Decidí irme a trabajar a Calama tiempo después, con ya 5 hijos. Nunca hablé de la desaparición de mi hermana, menos en mi trabajo, por miedo a ser despedido y discriminado por esa razón, ya que los dueños de las empresas con los que trabajé se mostraban partidarios del régimen militar.

Nosotros los hermanos éramos muy unidos, yo extrañaba mucho a mi hermana, también veía cómo sufría mi madre la búsqueda de ella. Me refugié en el trabajo y nunca conté de mis sentimientos a nadie. Después de pasar un tiempo, con mis hijos más grandes, quedé cesante y no encontraba trabajo, para algunos trabajos era demasiado calificado y para otros ya era demasiado viejo. Pasé así una larga cesantía, me enfermé y me dio un infarto al corazón. Cuando me dieron el alta y ya en mi casa, mi hermana me avisó que un resto de Jenny había sido identificado. Sentí mucha impresión, mucho dolor, mucha rabia, tanto así que caí nuevamente enfermo. Mi cuerpo no resistió semejante impacto, me tuvieron que llevar de urgencia a la clínica, donde estuve 11 días en coma y los doctores tuvieron que regular mi organismo. Me diagnosticaron arritmia cardíaca severa y un edema pulmonar.

Creo que la desaparición de mi hermana nos afectó en todo ámbito, social moral, afectivo, ya que no tuvimos contención y hubo que seguir viviendo con el inmenso dolor de perder a mi amada hermana y lidiar con la indiferencia del Estado. También tuvimos que lidiar con el saber que desaparecieron hasta lo más mínimo de ella porque solo encontraron unos huesos pequeños. Fue terrible también ver a mi madre sufrir y deteriorarse hasta quedar postrada para luego fallecer. La falta de justicia, la falta de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



reparación nos ha golpeado fuertemente como familia.

Espero mi relato sirva para mantener vivos a los que están en el olvido”.

Testimonio de don Ricardo Federico Barra Rosales: “Mi nombre es Ricardo Federico Barra Rosales, y soy hermano de Jenny Barra Rosales, secuestrada y asesinada por agentes del Estado de Chile en 1977. Septiembre de 1973 es un tiempo que nunca se borrará de mi mente. Despertar con un ruido estremecedor de un helicóptero que sobrevoló nuestro barrio en la comuna de San Bernardo. Tiempo después se supo de la tortura y fusilamiento de los vecinos trabajadores de la maestranza de San Bernardo. Como niño jamás pude lograr cerrar mis ojos por miedo a dormir y que me pasara algo. El comienzo de una larga dictadura que nos golpeó de forma despiadada.

En agosto de 1974, a las 06:00 am, una patrulla militar allanó nuestro domicilio en busca de mi hermana Jenny. Luego supimos que el motivo de su detención fue por una denuncia de la directora del Liceo de Niñas de San Bernardo, acusando a Jenny de repartir panfletos que llamaban a la insurgencia. Durante esta primera detención mi hermana fue detenida en el cuartel N°2 de la Escuela de Infantería de San Bernardo y Cerro Chena. Trascurrido un largo período fue reconocida su detención por las fuerzas policiales, sin embargo, fue un largo período de incertidumbre para nuestra familia.

De esta manera, la Cruz Roja Internacional nos informó que estaba detenida en la Cárcel de Mujeres ubicada en el paradero N°7 de Vicuña Mackenna, Santiago. En este lugar permanece detenida 6 meses, durante ese período, mis padres logran construir su casa y nos cambiamos a calle industria, también en la comuna de San Bernardo. Durante la primera detención de mi hermana yo tenía 10 años, me encontraba en mi casa.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Luego de su liberación, vuelve al liceo y termina su enseñanza media, para luego ingresar a la Universidad Católica a estudiar enfermería, época en que se integró al MIR.

El día 17 de octubre de 1977 salió de nuestro domicilio con su carita sonriente y su pelito suelto, y jamás volvió. Fue secuestrada, torturada y hecha desaparecer por la dictadura. Yo me entero de su detención debido a que en ese período era el único de mis hermanos hombres que vivía en la casa de mis padres, junto a mi hermana menor Susana. Mis padres reaccionaron con mucha desesperación. Mi padre, que trabajaba de noche, no dormía, y mis hermanos mayores ya no vivían en la casa. De todas formas, yo veía que tenían mucho miedo y creo que por eso se alejaron de la casa, por el temor a que les pasara lo mismo que a mi hermana.

Fue un oscuro trayecto de nuestra vida como familia ante una atrocidad cometida por el Estado en contra de una joven de tan solo 23 años y que hasta hoy está sin justicia ni reparación alguna. Esto me afectó en todos los sentidos, emocionales, laborales y coartó mi desarrollo personal. Tuve que abandonar mi proyecto de vida y salir a la calle a buscar a mi hermana. Me uní a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, donde realizábamos distintas acciones en defensa de los derechos humanos y distintas actividades clandestinas. En la agrupación me protegían pues yo tan solo tenía 17 años y varias veces tuve que arrancar de los carabineros y las fuerzas represivas. Me golpearon y me detuvieron, teniéndome incomunicado.

Cuando mi hermana desapareció yo estaba estudiando mi enseñanza media. Me tuve que retirar y tiempo después convalidé mis estudios en una escuela nocturna. La vida fue muy difícil y triste ya que había permanentemente seguimientos y había que cuidarse de no caer detenido, lo que hacía más difícil la búsqueda de mi hermana. Ha sido un camino largo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



de recorrer.

Perdí la cuenta de cuantas veces me tomaron detenido. En una oportunidad el año 1979 caímos detenidos por desórdenes en la vía pública por solicitar justicia por nuestros familiares. Me llevaron a la 3ª Comisaría de Carabineros. Dentro del furgón me dieron una brutal pateadura y me quebraron un dedo, me tuvieron en una sala donde había unos tipos de civil quienes me hacían preguntas. Parecía que ellos mandaban a carabineros y necesitaban la autorización de ellos para poder soltarme. Me interrogaron sobre si portaba armas, me decían que ellos sabían con quién yo me juntaba. Los organismos de seguridad desataron todo tipos de presiones psicológicas y seguimientos, me sentí amedrentado debido a que me seguían a todos lados en un vehículo con tipos dentro. Me seguían a la Vicaría de la Solidaridad, a la escuela y a mi casa, en todos los lugares que yo concurría.

Para el año 1981 eran muchos los seguimientos, por lo que el Sr. Roberto Garretón, abogado de la Vicaría de la Solidaridad, presentó un recurso de amparo en mi favor, por lo que pudiera sucederme. Yo creo que todos los hermanos Barra Rosales estuvimos bajo el ojo de la DINA y de la CNI.

La desaparición de mi hermana es un daño irreversible para nuestra familia. Por mucho tiempo no se nos dio credibilidad, nadie nos quiso escuchar, y los organismos del Estado desacreditaron y devaluaron a mi hermana Jenny como mujer y activista. Durante muchos años permanecimos con la esperanza de volver a abrazar a nuestra hermana, lo cual jamás ocurrió, sin repuesta de las autoridades ni justicia hasta hoy. Solo encontramos unos pequeños fragmentos de sus huesos.

En lo personal todo lo ocurrido cambió e interfirió en las oportunidades y expectativas de desarrollo que como niño pudiese haber



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



tenido. Fui vulnerado en mis derechos por el Estado, que hasta la fecha no nos ha brindado la contención emocional y justicia que como familia tenemos por derecho”.

Testimonio de Susana Ximena Barra Rosales: “Mi nombre es Susana Ximena Barra Rosales, nací el 1 de marzo de 1969 y para la desaparición de mi hermana Jenny en manos de agentes del Estado de Chile, yo tenía 8 años.

Cuando ocurre el golpe de Estado del 11 de septiembre, yo no tenía conciencia, porque era tan solo una pequeña niña, sin embargo, recuerdo detalladamente el allanamiento de mi casa durante la primera detención de mi hermana. Los militares la buscaban, decían su nombre, andaban con una lista y fotos. Recuerdo tres militares revisando los colchones y sus fusiles, mientras yo estaba acostada porque dormía con mis papás. Recuerdo a nuestro perro ladrar y se les tiraba y mataron al perro. No lo vi, pero sentí los disparos y cómo todo se quedó en silencio. Mi mamá Laurisa hablaba, preguntaba dónde la llevaban, pero no le respondían, solo le decían que la iban a interrogar. Sé que la llevaron en un camión porque escuché a mi mamá decirlo, y que en ese camión iban todas sus compañeras del Liceo. Mi papá mandó a avisar que esa noche iban a allanar y que estuviéramos todos en la casa, él trabajaba de noche en una panadería, por lo que no recuerdo si estaba en la casa. Por largo tiempo buscamos a mi hermana, recuerdo acompañar a mi madre a la Escuela de Infantería de San Bernardo del Ejército para preguntar por ella, pero ellos nos decían que se había ido con algún pololo.

Recuerdo que, durante ese período, seguí yendo al colegio, iba en pre-kínder, pero nos cambiamos de casa, porque mi papá la estaba construyendo en otro sector de San Bernardo. Mi mamá se quiso ir de donde estábamos rápidamente por miedo a que estuviera ya identificada la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



casa, y nos fuimos todos los hermanos, menos mi hermano mayor Sergio que para esa fecha ya se había casado. En la nueva casa vivíamos 4 hermanos y puedo recordar claramente cuando mi hermana es dejada en libertad y llegó a la casa. La vi muy delgada, pálida, con una caja de cartón donde lleva sus pertenencias, y mi madre estaba muy contenta. Luego mi hermano Enrique se casó y se fue de la casa y yo seguí estudiando, mis hermanos también. Jenny me ayudaba en las tareas, me regalaba libros porque aprendí a leer. Ella comenzó a estudiar en la universidad, la recuerdo leer hasta altas horas de la noche, también le gustaba tejer y los sábados nos reuníamos todos y mis hermanos ayudaban en la cocina. Mi hermana varias veces me dejó acompañarla a Santiago centro a la universidad. Salíamos mucho, dependiendo del tiempo de ella, pero la recuerdo tocando su guitarra y cantando en reuniones que se hacían en la casa con sus compañeros del MIR.

Cuando nos enteramos de la segunda detención y desaparición de Jenny en 1977, yo tenía 8 años. Recuerdo que ese día que la detuvieron yo la estaba esperando porque íbamos a salir al cajón del Maipo, nos gustaba mucho ir ahí juntas. Ella tenía que hacer ese día un trámite y no me podía llevar, y me quedé esperándola. No llegó el primer día y no llegó el segundo día, ni el tercero, y ahí mis papás empezaron a preguntar por todos lados. Mi papá desesperado puso un aviso en la radio chilena de utilidad pública que se había perdido su hija, empezaron a ir a la Vicaría de la Solidaridad, pusieron un recurso de amparo por ella y denunciaron a la policía de investigaciones. Empecé a ver la desesperación y angustia de mis papás, mi mamá lloraba todos los días. Inicialmente mi papá puso todas las denuncias, fue a la Cruz Roja Internacional, a la Universidad Católica donde estudiaba. Mi mamá en ese período estuvo muy mal emocionalmente, en un estado de histeria, exigía repuestas a cualquiera, salía a la calle a hablar con





los vecinos preguntando por mi hermana, caminaba por las calles y hacía la misma ruta que mi hermana todos los días esperando encontrarla en el camino. La gente que la veía se quedaba incrédula, me parecía que la gente no le creía y la tachaban de loca y que su hija también era loca.

Durante el año 1978, mi mamá solo vestía de café, se refugió en la iglesia y se olvidó de mí, de cómo iba al colegio y regresaba. Yo seguía yendo sola, no recuerdo cómo me iba en mis calificaciones, andaba mal vestida, nadie se encargaba ni de mi aseo personal. Recuerdo que mi papá, siendo yo más grande, me esperaba cuando salía tarde, me esperaba todos los días. Se terminaron todas las fiestas, no había Navidad ni años nuevos, no había motivos para celebrar. Mi hermano Ricardo tuvo que crecer rápidamente y yo andaba siempre sola. En mi colegio nadie sabía lo que estaba pasando en mi casa y tenía prohibido hablar, por miedo a represalias y que nos sindicaran como los comunistas, nunca conté nada, ni siquiera en mis años de liceo.

La desaparición de mi hermana implicó que, a mis tiernos 8 años, se viese interferida mi infancia. Nadie me explicó a esa edad, en palabras de niño, qué fue lo que pasó con Jenny, quien además era el adulto más significativo para mí. Fue como quedarme sin madre y en un abandono emocional, pues nadie se percató de mí y lo que pudiese sentir frente a tal nivel de violencia y miedo. La extrañé tanto, porque pese a mi corta edad era consciente de su ausencia, me iba a su pieza y le tomaba el olor a sus mantitas. La extraño hasta hoy.

A la fecha puedo sentir el daño emocional que dejó la desaparición, tortura y asesinato de mi hermana: la nula contención emocional y psicológica que, además, invisibilizó mi dolor de niña y mi infancia, el estrés y el miedo se quedaron en mí y me llevaron a vivir en un estado de alerta. No se me dio apoyo psicológico, psiquiátrico, económico. Los esfuerzos de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



una familia impulsaron la búsqueda incansable de mi hermana, mermando el desarrollo personal, social y económico, mío y de mis hermanos. Con el retorno a la democracia creímos en la justicia, celebramos el plebiscito pues sería la oportunidad para tener respuesta y justicia para mi hermana y su paradero, sin embargo, ya han transcurrido 45 años sin respuestas. Los gobiernos de turno se han encargado de relativizar la muerte, tortura y asesinato de mi hermana. Además, durante su búsqueda se ridiculizó, denostó, devaluó y humilló moralmente la figura de mi hermana, siendo víctimas tanto mi madre como mi hermana de violencia de género por parte del Estado y sus instituciones, al sindicarnos de locas, terroristas, drogadictas, comentando cosas como “algo habrá hecho, por eso desapareció” o diciendo que se fue del país con pololos. Tantas frases que escuché y se quedaron en mi memoria para siempre.

Debió ser tan terrible para mi madre que durante los 2 años posteriores a la desaparición de Jenny se olvidó completamente de sus otros hijos, pese a eso la entiendo, sobre todo la entendí cuando yo perdí a mi hijo Alonso a causas del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, entendí su dolor. Cuando encontramos el cuerpo de mi hijo la respuesta y consuelo de mi madre fue: “al menos usted encontró a su hijo”.

Para finalizar es importante señalar que con fecha 9 de noviembre del 2012, se hace entrega por parte del Servicio Médico Legal de unos pequeños fragmentos óseos de nuestra hermana: el manubrio del esternón y el hueso del dedo pequeño del pie. Luego de realizadas todas las pericias se permite la identificación, luego de una pericia a cargo de un laboratorio en Austria.

Todo el proceso fue muy doloroso. Nos llegó a nuestro domicilio una notificación de la asistente social de Programa de Derechos Humanos, señalando citando a todos los hermanos y mis padres a la Corte de San



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Miguel, donde se nos explicó el procedimiento de identificación y coordinación para la entrega de los fragmentos. Recuerdo que nos mostraron en una pantalla una imagen del cuerpo humano, donde nos señalaron la parte del cuerpo a la cual pertenecía cada fragmento óseo.

Luego nos citaron al Servicio Médico Legal, donde nos recibió un equipo junto al Director de ese entonces, Dr. Patricio Bustos, a quien recordamos con mucho afecto y respeto. Recuerdo que nos hicieron pasar a una sala donde había una mesa con un mantel blanco. Había unas flores rojas y decía el nombre de mi hermana. En medio de las flores estaba el huesito muy pequeño de Jenny. Mi madre Laurisa tomó en sus manos el huesito y le hablé, le dijo “eres mi hija, volviste a mí, te vamos a llevar a la casa para hacerte un funeral como corresponde”. Yo no fui capaz de hablar, solo sollozaba, fue muy impactante ver a mi mamá hablar, fue muy hermoso lo que dijo. Lo más impresionante fue que lo único que se encontró de mi hermana fue un pequeño fragmento. Fue un dolor incalculable, porque imagino cuánto sufrió Jenny, con la impotencia de no poder hacer nada por ella, son muchos años de dolor y sin justicia, sin repuestas, sin culpables, los que siguen impunes, me crea un sentimiento de indefensión que no logro sanar, y la injusticia se apodera del día a día, adquiriendo una desesperanza y dolor que he traspasado sin ser consciente a mis hijas.

Todo esto ha gatillado una serie de dificultades sociales, psicológicas y económicas. Por todos los traumas no logré sacar una carrera profesional, por lo que es muy difícil sostenerme autónomamente en lo económico. Me es muy difícil terminar cualquier cosa que comienzo, en mis pensamientos lidio constantemente con ansiedad y falta de sueño. Día a día está muy viva la imagen de mi hermana y con anhelo imagino cómo sería nuestra vida si ella estuviera con vida. El silencio y el hermetismo se instalaron en mi vida





siendo difícil relacionarme con otras personas en los contextos laborales por miedo a saber quién soy y las represalias que esto pudiese conllevar.

Soy la menor de 6 hermanos y hoy uno de mis mayores miedos es que nuevamente alguno de ellos muera sin tener justicia y reparación por el asesinato de su hermana, como pasó con mis padres que a su edad debían ser adultos mayores amados protegidos, cuidados y disfrutando sus últimos días después de toda una vida de trabajo. En cambio ellos debieron enterrar a su hija estando en conocimiento de las atrocidades que vivió, ningún ser humano puede lidiar con ese dolor”.

Refiere que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, más conocido como “Informe Rettig”, ha establecido respecto a doña Jenny del Carmen Barra Rosales, lo siguiente:

“El 17 de octubre de 1977, luego de salir de la casa de una amiga, alrededor de las 21:30 horas, fue detenida la estudiante y militante del MIR, Jenny del Carmen Barra Rosales.

El día 19 de octubre de 1977, al salir del Jardín Infantil G-27, de la población Teniente Merino, donde trabajaba, fue detenido por un grupo de agentes de civil, el joven Hernán Santos Pérez Álvarez. Este último, militante del PS y amigo de Jenny Barra, fue golpeado con manoplas e introducido a viva fuerza a un vehículo. El secuestro fue presenciado por numerosos testigos, quienes lograron registrar la patente de uno de los vehículos utilizados. En el interior de dicho vehículo fue vista, acompañada de tres sujetos, Jenny Barra estando ya detenida.

La investigación judicial permitió aclarar que la patente del vehículo utilizado en estos hechos, correspondía a una patente de gracia, otorgada por la Municipalidad de Renca al organismo denominado Dinar que tenía registrado domicilio en el edificio Diego Portales. Estos antecedentes, agregados a otras evidencias, le permiten a esta Comisión llegar a la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



convicción de que la detención y desaparición de Jenny Barra y de Hernán Pérez fue practicada por agentes de la DINA, quienes violaron así sus derechos humanos”.

Expresa que actualmente existe una causa criminal abierta por los crímenes cometidos en la persona de doña Jenny del Carmen Barra Rosales, sustanciada por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Il. Corte de Apelaciones de San Miguel, Sra. Marianela Cifuentes Alarcón, Rol 06-02-F, que se encuentra en estado de plenario. En dicha causa se han tenido por legalmente acreditados los siguientes hechos:

1° Que el día sábado 15 de octubre de 1977, en horas de la mañana, fue detenido José Miguel Tobar Quezada, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de nombre político “David”, por agentes de seguridad que se movilizaban en el automóvil marca Peugeot modelo 404 de color gris patente CH 800 de Renca, quienes pusieron cinta adhesiva en sus párpados y lo trasladaron a un lugar desconocido.

2° Que, con el fin de obtener información acerca de sus contactos en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), los agentes sometieron a José Miguel Tobar Quezada a interrogatorios y apremios ilegítimos, logrando obtener la identificación de Jenny del Carmen Barra Rosales, de 23 años, estudiante de la carrera de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, de nombre político “Hilda”.

3° Que, seguidamente, los agentes se trasladaron en un automóvil marca Peugeot a las inmediaciones del domicilio de Jenny del Carmen Barra Rosales, ubicado en Las Industrias N° 1.675 de la comuna de San Bernardo, entrevistándose con su vecino Jaime Vera Maulén, a quien consultaron respecto de ésta y de su familia.

4° Que el día lunes 17 de octubre de 1977, en horas de la tarde,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Jenny del Carmen Barra Rosales fue detenida, sin derecho, por agentes de seguridad, tras salir de la casa de una amiga, situada en calle José Joaquín Pérez N° 1.073 de la comuna de San Bernardo, en dirección a su domicilio y, posteriormente, la trasladaron al mismo recinto en que permanecía privado de libertad Tobar Quezada, quien pudo escuchar su voz mientras era interrogada.

5° Que el día miércoles 19 de octubre de 1977, en horas de la mañana, agentes de seguridad acompañados de la detenida Jenny Barra Rosales, se trasladaron en el automóvil marca Peugeot modelo 404 de color gris patente CH 800 de Renca a las inmediaciones del jardín infantil “Los Leoncitos”, ubicado en calle Los Montes N° 1.216 de la población Teniente Merino de la comuna de Pudahuel, con el fin de detener a Hernán Santos Pérez Álvarez, fotógrafo, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, quien, al igual que José Miguel Tobar Quezada y Jenny del Carmen Barra Rosales, colaboraba con el periódico “El Rebelde”, concretando su aprehensión alrededor de las 13.30 horas de ese día, en calle San Francisco de la misma comuna.

6° Que Jenny Barra Rosales y Hernán Pérez Álvarez estuvieron ilegalmente privados de libertad en el centro de detención clandestino “Villa Grimaldi”, situado en Avenida José Arrieta N° 8.200 de la comuna de Peñalolén, a cargo del Capitán Miguel Krassnoff Martchenko y, luego, en el centro de detención clandestino “Simón Bolívar” ubicado en calle Simón Bolívar N° 8.800 de la comuna de La Reina, a cargo del Mayor Juan Hernán Morales Salgado, oficiales del Ejército de Chile que se encontraban bajo el mando del General de Brigada Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda -actualmente fallecido-, el Coronel Pedro Octavio Espinoza Bravo y el Teniente Coronel Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, quienes ostentaban los cargos de Director de la Dirección de Inteligencia Nacional,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Director de Operaciones y Subdirector de Inteligencia Interior de dicho organismo, respectivamente.

7° Que, en esa época, el Capitán Miguel Krassnoff Martchenko se encontraba, además, al mando de las agrupaciones operativas Halcón I y II, encargadas de la investigación y represión de los militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

8° Que José Miguel Tobar Quezada también estuvo privado de libertad en el centro de detención clandestina “Simón Bolívar”, siendo liberado, gracias a la intervención de un familiar, en la vía pública.

9° Que, luego de la disolución de la Dirección de Inteligencia Nacional (D.I.N.A.), dispuesta por el Decreto Ley N° 1.876, de 12 de agosto de 1977, los centros de detención “Villa Grimaldi” y “Simón Bolívar”, los agentes encargados de su funcionamiento y sus superiores jerárquicos pasaron a formar parte de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.), organismo creado para tomar su lugar, mediante el Decreto Ley N° 1.878, de la misma fecha, lo que se mantuvo hasta que se hace cargo de la Dirección de la C.N.I. el General Odlanier Mena Salinas.

10° Que, a partir de información obtenida gracias a la denominada “Mesa de Diálogo”, a comienzos del año 2001, en la causa rol 1-2001 de la Corte de Apelaciones de San Miguel, se dispuso realizar labores de excavación en la mina “Los Bronces” de la Cuesta Barriga, en busca de restos de detenidos desaparecidos inhumados de manera ilegal en dicho lugar, logrando encontrar ciento ochenta fragmentos óseo-dentales humanos, determinándose que un manubrio esternal y un cuarto metatarsiano izquierdo correspondían a Jenny del Carmen Barra Rosales y que un incisivo lateral superior derecho pertenecía a Hernán Santos Pérez Álvarez, estableciéndose que la primera falleció a raíz de un politraumatismo causado por terceros, desconociéndose la fecha y el lugar en que fue



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



asesinada y el destino final de su cuerpo, ya que lo encontrado en la mina solo corresponde a fragmentos, quedados tras la remoción y traslado de los restos ya esqueletizados a un sitio no determinado, acciones llevadas a cabo en el mes de enero de 1979, en cumplimiento de una orden dada por el Coronel de Ejército Jerónimo Pantoja Henríquez -actualmente fallecido-, por parte de agentes de la C.N.I., entre ellos, Enrique Erasmo Sandoval Arancibia.

Explica que por estos hechos han sido acusados Pedro Octavio Espinoza Bravo, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Juan Herrera Morales Salgado en calidad de autores del delito de secuestro calificado; y Erasmo Sandoval Arancibia en calidad de encubridor de secuestro calificado, delitos cometidos en la persona de Jenny del Carmen Barra Rosales.

En cuanto al derecho, señala lo siguiente.

- a) Los hechos relatados encuadran en un episodio de lesa humanidad.

Indica que los antecedentes consignados forman parte del catálogo de crímenes reconocidos como de lesa humanidad según lo establecido en el Estatuto del Tribunal Militar de Nüremberg de 1945.

Menciona que crímenes intolerables para la humanidad han hecho surgir un complejo normativo especial en el ámbito del Derecho Internacional, cuestión que resulta fundamental a la hora de resolver qué clase de responsabilidad le cabe al Estado de Chile. Refiere jurisprudencia.

- b) La responsabilidad del Estado analizada desde la Constitución Política de la República.

Hace presente el artículo 38 inciso 2º de la Constitución, mencionando que este precepto consagra una acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad de los organismos del Estado, cuando estos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



por su actividad provoquen un daño a una persona. Refiere jurisprudencia. Indica que la norma constitucional citada se complementa con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 18.575, y el artículo 4 de la misma ley.

Agrega que el fundamento básico de esta responsabilidad legal o extracontractual del Estado está contenido en diversas disposiciones de rango constitucional, supraconstitucional y también legal, todas las cuales son normas propias del ámbito del derecho público.

Refiere jurisprudencia de la E. Corte Suprema que abrió camino en la adopción por los tribunales chilenos de criterios establecidos por el derecho internacional en las causas de esta naturaleza: casos como “Caro con Fisco”, “Bustos con Fisco” y “Albornoz con Ortiz y Fisco.”

Asegura que para una adecuada comprensión y delimitación de la responsabilidad del Estado por los hechos que sustentan su demanda, resulta necesario remitirse al Capítulo I de la Constitución, sobre las Bases de la Institucionalidad, donde se desarrollan los principios basales desde donde se estructura todo el sistema institucional. Cita el artículo 1 inciso 4º, y el artículo 5 inciso 2º. La conjunción de ambos preceptos resume la doctrina completa del constitucionalismo, o sea, del poder limitado por el Derecho, para servir a la persona sobre la base de los principios que caracterizan a la civilización centrado en los valores de la dignidad y los derechos inalienables del ser humano. (Cea, José Luis. Derecho Constitucional Chileno. Tomo I. Pág. 210).

Sostiene que las disposiciones reseñadas en conjunto con los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, que a su vez establecen los principios de la primacía constitucional y de juridicidad, conforman el denominado estatuto de la responsabilidad extracontractual del Estado. Responsabilidad que emana de la naturaleza misma del ente estatal como



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



persona jurídica compleja creada para la realización del bien común.

c) La responsabilidad del Estado a la luz del Derecho Internacional.

Advierte que este conjunto de normas y principios no han hecho sino reconocer aquello que a nivel internacional se ha venido desarrollando por más de un siglo. En efecto, concepciones tales como bien común, la superioridad ontológica de la persona frente al Estado o la dignidad humana como límite a la soberanía estatal, formaban ya parte integrante del corpus iuris internacional conformado por el derecho internacional humanitario así como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos del cual el Estado de Chile forma parte.

Afirma que el Estado de Chile mediante la suscripción de declaraciones y convenciones a nivel internacional, así como concurriendo con su voto en la aprobación de múltiples resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estado Americanos, o bien mediante la vigencia de la costumbre internacional y los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas (Art. 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia) ha ido adquiriendo de forma progresiva una serie de obligaciones que responden a la obligación general de “respeto de los derecho esenciales de la persona” por parte de los Estados. Tal obligación se desprende del preámbulo y artículos de la Carta de la Organización de los Estado Americanos, en concordancia con los preceptos de la Carta de las Naciones Unidas, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Manifiesta que todo lo anterior, esto es, el desarrollo de este complejo normativo conocido como Derecho Internacional de los Derechos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Humanos, ha importado un cambio significativo en la configuración de la responsabilidad estatal. En concreto, en materia de derechos humanos los Estados tienen una obligación de resultado, cual es, la efectiva vigencia de los derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales.

De allí, la responsabilidad del Estado por violación a los derechos humanos es una cuestión objetiva, toda vez que el ilícito por violaciones a los derechos fundamentales se produce en el momento en que el Estado actúa en violación de una norma obligatoria, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente. (Cfr. Aguiar, Asdrúbal. La responsabilidad internacional del Estado por violación de derechos humanos. 1993. Pág. 25). Se trata, en consecuencia, de una responsabilidad objetiva en donde no interesa la presencia de dolo o culpa en el accionar dañoso del Estado. La responsabilidad internacional del Estado nace al momento en que con su actuar se infringe los límites que le señalan los derechos humanos como atributos inherentes a la dignidad de las personas, sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del autor material del acto.

Indica que confirma normativamente esta interpretación el encabezado del artículo 19 de la Constitución.

Relata que la Constitución reconoce y asegura la vigencia de los derechos humanos, obligándose ante la comunidad internacional a su efectiva vigencia a través de su artículo 5 inciso 2º, que sanciona e incorpora toda la normativa internacional aplicable en la especie. Cita el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Añade que el artículo 19 N° 20 de la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de las cargas públicas. Aquí se consagra la idea básica según la cual nadie está obligado a soportar una carga que no haya sido establecida por la ley, ni aun en pro del bien común, como lo establece



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



la jurisprudencia de la Corte Suprema.

d) La improcedencia de aplicar las normas y principios del derecho privado a los casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Expresa que la correcta resolución del caso sub lite requiere la aplicación armónica de la Constitución Política, de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la Ley de Bases de la Administración del Estado. A contrario sensu, en este conflicto son improcedentes las reglas propias del derecho de daños contenidas en el Código Civil, toda vez que dicho estatuto se construye sobre premisas y principios diferentes a los del derecho público y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, constituyendo un error de lógica y sistemática jurídica la aplicación de normas de derecho privado a las situaciones en que se persigue la responsabilidad del Estado por actos dañosos, ya que ambos difieren en su naturaleza y fines, destinado a otras conductas e intereses.

La diferencia entre uno y otro sistema de responsabilidad es evidente. Por el momento basta con recordar que: “es claro que el perjuicio causado a un particular por otro o por el Estado en cuanto sujeto de relaciones privadas, es diverso al perjuicio que se le puede causar a un particular por una actuación ilícita y dañosa de un Estado con relación a los derechos y libertades fundamentales de la persona humana.” (Cfr. Nash, Claudio. Las reparaciones ante la Corte Interamericana de Derecho Humanos. Santiago de Chile, Pág. 23).

Hace presente el razonamiento de dos jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos quienes se han pronunciado de forma directa sobre lo inadecuado que resulta extender por la vía de la analogía ciertos conceptos propios del Derecho Civil para resolver conflictos que versen sobre violaciones a los derechos fundamentales del ser humano.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Refiere jurisprudencia.

Enumera un conjunto de razones de texto que llevan a sostener por qué el derecho de daños del Código Civil chileno es insuficiente para resolver conflictos que versan sobre violaciones a los derechos fundamentales de la persona humana. Tales razones son las siguientes:

1) Este caso no se trata de la búsqueda de una reparación para un delito común. Así, el Código Civil no es la norma que tiene que juzgar aquellos actos en donde los hechos que se ventilan dicen relación directa con una práctica sistemática y masiva por parte del Estado destinada a exterminar a un número importante de la población nacional, sólo en razón de sus creencias e ideologías políticas. Por lo tanto, para no desnaturalizar el tenor literal del artículo 2314 del Código Civil uno tendrá que reconocer que dicha norma fue diseñada para resolver ilícitos comunes y, por lo mismo, ante un caso como éste, el derecho aplicable debe hallarse más bien en el ámbito constitucional, administrativo e internacional; y,

2) Las normas del Título XXXV del Libro IV del Código de Bello fueron dictadas en un contexto en donde los mayores riesgos, peligros y daños parecían venir del comportamiento de personas ebrias (artículo 2318); de adolescentes con mala educación y hábitos viciosos (artículo 2321); edificios en ruinas (artículo 2323); o bien, de animales sueltos, extraviados y fieros (artículos 2326 y 2327). De más está decir que la regla del artículo 2322 es del todo insuficiente a la hora de resolver la dinámica que se produce al interior de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. De la misma manera, aunque existe una norma que parece más pertinente a este asunto concreto; el caso de quien dispara armas de fuego de manera imprudente (artículo 2329 N°1). Con todo, dicha regla también es inadecuada para resolver casos de violaciones intencionales, masivas y sistemáticas a los derechos esenciales de un sector no menor de habitantes



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



del Estado.

e) La imprescriptibilidad de las acciones judiciales en casos de responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

Expone que la materia de que trata la presente causa quede gobernada bajo normas de carácter público e internacional por sobre las meramente privadas, implica reconocer la autonomía y orgánica particularidad del complejo normativo de los derechos humanos, de modo tal que no solo cabe afirmar el carácter objetivo de la responsabilidad del Estado sino además la imprescriptibilidad de las acciones patrimoniales derivadas de las violaciones a los derechos humanos.

Afirma que en toda sociedad democrática y respetuosa de las libertades de cada individuo, los ataques y los daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o la libertad ambulatoria de una persona, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

Menciona que la citada Convención Americana, tratado internacional ratificado por Chile y actualmente vigente en su territorio por la vía del artículo 5º inciso 2º de la Constitución Política, señala la existencia del deber de reparar que se le impone a todo Estado que haya sido responsable de violar alguno de los derechos fundamentales de la persona humana que se encuentren garantizados por dicha Convención. Refiere jurisprudencia.

Por lo tanto, en Chile, dada su calidad de Estado miembro del sistema interamericano, la lógica que debiera operar en casos de violaciones de derecho humanos de alguna persona tendría que ser la misma: reparar íntegramente el mal causado. Obligación ésta del Estado que queda sujeta al constructo normativo de los derechos humanos y a sus principios formativos, a saber: el principio pro homine, entendiendo por tal la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



interpretación de sus preceptos en el sentido más favorable a la persona; el principio de progresividad de sus normas abiertas a una evolución conceptual; y el principio de la congruencia de aquellas, entre otros. (Cfr. Nikken, P. “El concepto de derechos humanos”, en Estudios Básicos de Derechos Humanos, I.I.D.H., Costa Rica, 1994. pp. 15-17.)

Relata que tal es la lógica conclusión que fluye de una revisión somera de la extensa reglamentación internacional sobre la materia. Ya en el ámbito del Derecho Internacional Humanitario el artículo 3 del Convenio IV de La Haya relativo a las “Leyes y costumbres de la guerra terrestre” (1907) dispone la obligación de las Altas Partes contratantes de pagar una indemnización en caso de violación de sus normas. Idéntica concepción recogen los Convenios de Ginebra de 1949 ratificados por Chile el año 1951, particularmente en los artículos 68, relativo al trato de los prisioneros de guerra, y 55, que versa sobre protección de las personas civiles en tiempo de guerra, así como en el artículo 91 del Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra, relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales. Así también cabe mencionar la Convención sobre la imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad, instrumento no ratificado por Chile, pero cuya obligatoriedad se encuentra reconocida por nuestros tribunales de justicia, como emanación de una norma de ius cogens. (Cfr. E. Corte Suprema 13.12.2006, “Caso Molco”, Rol N° 559- 2004. Considerando N° 19). En fin, vale reparar en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, aprobado por el Decreto Supremo N° 144 publicado el 1 de agosto de 2009, que en su artículo 75 (sobre reparaciones a las víctimas), establece que: “[...] La Corte podrá dictar directamente una decisión contra el condenado en la que indique la reparación adecuada que ha de otorgarse a las víctimas, incluidas la restitución, la indemnización y la rehabilitación”.





Explica que nuestro país ha concurrido bajo el amparo del tratado marco de la Carta de las Naciones Unidas de 1948, conforme a la información oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, obligándose por tratados internacionales de ejecución, los cuales ha suscrito en la modalidad de declaraciones y resoluciones por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Concluye que la idea de reparación se trata de una obligación compleja e indisoluble constituida por el deber de investigar los hechos, la obligación de sancionar a los responsables y la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Esta última obligación tiene que ser tratada como un deber imprescriptible en virtud del Principio IV de dicho cuerpo legal.

Puntualiza que el fundamento en virtud del cual un Estado queda obligado a la ejecución de una reparación determinada frente a una persona que haya sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales mediante ilícitos que la conciencia jurídica universal considera intolerables, se rige por normas y principios del derecho público e internacional de los derechos humanos logrando sujetar dentro de sus esferas, por vía de la progresividad normativa, un sistema de responsabilidad autónomo que se conforma transversalmente desde los primeros acuerdos interestatales sobre el *jus in bello*. Así lo han entendido los Tribunales Superiores nacionales y es en ese sentido que la más reciente jurisprudencia de la E. Corte Suprema le ha otorgado el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de los crímenes de lesa humanidad atentatorios contra los derechos humanos. Se aprecia la concreción de los principios de congruencia y progresividad así como la interpretación e integración de sus normas según el ya citado principio *pro homine*.

f) Jurisprudencia de la E. Corte Suprema sobre casos de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXXGCXT



responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad.

A modo ilustrativo, menciona algunos de los fallos en que nuestra E. Corte Suprema ha declarado la imprescriptibilidad de la acción civil cuando éste emana de un crimen de lesa humanidad.

Refiere que excepciones como la de preterición legal de los hermanos, la excepción de pago y la excepción de prescripción extintiva de la acción civil reclamada históricamente por el Fisco en el tema de las reparaciones civiles solicitadas en causas por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura cívico-militar en Chile, es un tema zanjado por los Sres. Ministros que conocen de causas por violaciones de los derechos humanos, lo que ha sido ratificado por la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, fallando a favor de la pretensión de las víctimas directas y sus familiares, sintonizando de esa manera los jueces aludidos con la normativa internacional que propende a esa reparación mediante instancias expeditas y no dilatorias.

Arguye que en cuanto a lo más recientemente fallado por la Excma. Corte Suprema, esta ha determinado de manera clara y precisa, zanjando definitivamente la discusión respecto a la excepción de prescripción extintiva de la acción civil. Relata que la Excma. Corte Suprema ha rechazado in limine el recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco de Chile, en el cual alega las excepciones de preterición de los hermanos y la prescripción extintiva de la acción civil, por manifiesta falta de fundamentos.

Cita jurisprudencia respecto de la preterición de los hermanos, del Máximo Tribunal.

Menciona que en un caso como el presente, la reparación a la demandante pasaría por el hecho que la judicatura interna acogiese la acción civil incoada con ese propósito. Ésta es la única conclusión a la que se puede arribar si se considera que los hechos que dan vida a su demanda



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



son las actuaciones ilícitas cometidas por el Estado de Chile en contra de la vida, integridad física y libertad ambulatoria de la víctima.

g) Lo que ha fallado la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la aplicación, por los tribunales chilenos, de la institución de la prescripción, respecto de las acciones civiles impetradas por víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Expone que existen en la actualidad varias denuncias ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos por el rechazo de demandas civiles impetradas por víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico- militar que azotó a nuestro país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, por incumplimiento al deber que le corresponde al Estado de reparar a dichas víctimas, ya que los tribunales chilenos consideraron, en la época en que estas demandas fueron presentadas, que dichas acciones estaban prescritas (pero ese criterio cambió).

Cita jurisprudencia, refiriendo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo recomendaciones al Estado.

Hace presente que dentro de la tramitación del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Chile contestó e hizo un reconocimiento de responsabilidad internacional, y mencionó que las reclamaciones de reparación por violaciones de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción. Incluso hizo un análisis del cambio jurisprudencial que, a través de la Corte Suprema, se ha ido dando en Chile en torno a la discusión sobre la imprescriptibilidad. Refiere que la Corte finalmente resolvió condenando al Estado de Chile, lo que establece un precedente más en cuanto a la imposibilidad de aplicar la prescripción de la acción civil en estos casos.

### III. El daño provocado y el monto de la indemnización



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Señala que en este caso existe un daño de carácter moral que se expresa en dolor, sufrimiento, angustia, sensación de pérdida, luto permanente e inconcluso, rabia e impotencia ante una situación injusta e ilegítima que, como hermanos de doña Jenny del Carmen Barra Rosales, les ha tocado soportar a sus representados. La dolorosa y terrible situación a la que se vieron enfrentados, siendo jóvenes y algunos incluso menores de edad, configura un claro daño moral que, según la dogmática jurídica y la jurisprudencia nacional e internacional, amerita ser reparado, mediante la indemnización.

Explica que se entiende por daño moral aquella específica clase de menoscabo que afecta a los atributos y facultades morales o espirituales de una persona, esto es un dolor, un pesar, una angustia, molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos a consecuencia del hecho ilícito y, en general, toda clase de sufrimiento moral o físico. Esta forma de conceptualizar el daño moral es consistente con los sentidos dados por la doctrina chilena y la jurisprudencia (nacional e internacional).

Cita doctrina nacional, y sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia.

Respecto de la prueba del referido daño moral en sede judicial, esgrime que tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere ser probado en juicio en tanto se tenga por acreditado el hecho ilícito que lo ha generado. Del sentido común fluye que un familiar, en este caso los hermanos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos tan brutales, han sufrido un daño que debe ser reparado, en todas sus dimensiones. Menciona que desde el momento en que ya se tiene por probado que una persona perdió su vida o vio lesionada su libertad individual o su seguridad personal por obra de agentes del Estado, entonces carece de sentido preguntarse en sede judicial si acaso los





más cercanos a la víctima habrán resultado ilesos en su fuero interno, sus afectos y emociones, luego de los delitos cometidos. Por eso es que, para un sector importante del foro judicial, al cual adhiere su libelo pretensor, basta que la víctima acredite la lesión de un bien jurídico personalísimo para que luego entonces se infiera, como consecuencia necesaria, el daño sufrido con ocasión del hecho ilícito cometido.

Cita jurisprudencia.

Hace presente que idéntico criterio al de la dogmática y la práctica judicial chilenas se halla a nivel de la jurisprudencia internacional. En la actualidad ya es jurisprudencia constante y pacífica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la idea de que el daño moral no requiere prueba en sede jurisdiccional. De hecho, en las sentencias dictadas por esta Corte se constata que una víctima de violaciones graves a sus derechos humanos, tales como, las afectaciones a su derecho a la vida, o a la integridad personal o la libertad ambulatoria, no tiene que asumir como carga procesal la tarea de probar el daño moral que refiere haber sufrido.

Asegura que después de todo lo dicho hasta aquí, es comprensible que una demandante experimente cierta dificultad al momento de proponer ante la justicia alguna cifra exacta que haga las veces de reparación integral del mal causado. No obstante, los órganos encargados de la administración de justicia requieren de parte de quienes ejercen acciones legales que estos sean capaces, entre otras cosas, de expresar con claridad sus pretensiones y precisar de forma concreta las medidas de reparación a las que aspiran.

Sostiene que, por ello, se permite pedir al tribunal que se condene al Fisco de Chile al pago de una suma total de \$500.000.000.-, correspondiendo \$100.000.000.- a cada uno de los demandantes, estos son, don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y doña Susana



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Ximena Barra Rosales, a título de indemnización por el daño que se les ha causado como consecuencia directa de los crímenes cometidos en la persona de su hermana, doña Jenny del Carmen Barra Rosales, por parte de agentes del Estado de Chile, o bien, lo que el tribunal determine en justicia y equidad; cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

En consecuencia, solicita tener por interpuesta demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$500.000.000.-, correspondiendo \$100.000.000.- a cada uno de los demandantes, estos son, don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y doña Susana Ximena Barra Rosales, con ocasión de los crímenes cometidos respecto de su hermana, doña Jenny del Carmen Barra Rosales, ilícitos cometidos por agentes del Estado de Chile ya relatados en su libelo pretensor, o bien, en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia; cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa.

**Con fecha 14 de marzo de 2023, a folio 8,** comparece doña Ruth Israel López, Abogada Procurador Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por el Fisco de Chile, persona jurídica de Derecho Público, ambos domiciliados en calle Agustinas N° 1225, piso 4°, comuna de Santiago, quien contesta la demanda solicitando su rechazo en virtud de las defensas y excepciones que expone.

En primer lugar, conforme a lo dispuesto en los artículos 175 y 177



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



del Código de Procedimiento Civil, opone la excepción de cosa juzgada por existir sentencia definitiva ejecutoriada en la materia, respecto de los demandantes don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y, doña Susana Ximena Barra Rosales.

Refiere que los demandantes ya ejercieron una acción de indemnización de perjuicios al Fisco de Chile por estos mismos hechos, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada en la causa “Rosales con Fisco de Chile”, de la cual conoció el 26° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-3302-2003, por la desaparición de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, dictándose en esos autos sentencia definitiva que acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, confirmada por la Ilma. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada. Aduce que todo ello se acredita con las respectivas sentencias en que consta el ejercicio de la misma acción, la cuales solicita se traigan a la vista, concurriendo los requisitos que hacen procedente la excepción de cosa juzgada.

En cuanto a los hechos en que funda la excepción, refiere que en este proceso civil, los actores individualizados dedujeron demanda civil de indemnización de perjuicios por daño moral en contra del Fisco de Chile, por el daño moral sufrido como consecuencia del secuestro y asesinato de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, por parte de agentes del Estado, hecho ocurrido en el año 1977.

Advierte que, sin embargo, los actores dedujeron demanda civil en contra del Fisco de Chile seguida ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, en autos anteriormente individualizados.

Manifiesta que de los hechos expuestos en dicho libelo, se podrá apreciar que concurren las mismas partes, causa de pedir y objeto pedido,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



ya que los actores demandaron al Fisco de Chile por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de éste por el secuestro y la desaparición de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, por parte de agentes del Estado.

Hace presente que en el juicio mencionado, se dictó sentencia de término determinándose en definitiva que las acciones indemnizatorias deducidas se encontraban prescritas, quedando las respectivas sentencias ejecutoriadas.

Respecto del derecho en que funda la excepción de cosa juzgada, expone que la cosa juzgada constituye la expresión máxima de la preclusión, o sea, el cierre definitivo de la etapa que resuelve de una vez y para siempre el conflicto, erigiéndose pues en el objeto final del procedimiento. Doctrinariamente se sostiene que la cosa juzgada es “la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla”.

Explica que se entiende por autoridad de cosa juzgada aquella calidad o atributo propio del fallo que emana de un órgano jurisdiccional cuando ha adquirido carácter de definitivo, es decir, “el imperium” o la posibilidad de ejecutar lo fallado.

Precisa que, en cuanto a la eficacia de cosa juzgada, esta opera como medida de complemento de la autoridad de cosa juzgada a que ha aludido. Esta medida se traduce en tres posibilidades:

1.- Inimpugnabilidad: Se refiere a que la sentencia que produce cosa juzgada no puede ser revisada por ningún juez cuando se hayan agotado ya todos los recursos que prevea la ley. Es inexpugnable, la ley no acepta ningún ataque ulterior tendiente a obtener la revisión de la misma materia. Constituyendo en definitiva la consagración del principio del “non bis in ídem”.





2.- Inmutabilidad: Consiste en que la sentencia no es atacable indirectamente, por no ser posible abrir un nuevo proceso sobre el mismo tema; no puede otra autoridad modificar los términos de una sentencia pasada. Es decir, en ningún caso otra autoridad, de oficio o a petición de parte, podrá modificar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada.

3.- Coercibilidad: Consiste en la posibilidad de ejecución forzada en los casos de sentencia de condena. La cosa juzgada es susceptible de ejecución, de manera que cuando la resolución adquiere ejecutoriedad, se puede solicitar que el juez ejecute la sentencia de manera amistosa o forzada.

Menciona que en lo que dice relación con el límite objetivo de la cosa juzgada, se debe atender al objeto de la decisión y su causa de pedir, es decir, la determinación estricta de la “res in iudicium deductae”. Se configura de este modo la idea tradicionalmente aceptada por la doctrina, jurisprudencia y recogida por nuestra legislación de la triple identidad que debe existir para que la cosa juzgada pueda hacerse valer como excepción, a saber, identidad legal de persona, cosa y causa.

Expresa que conforme al artículo 1567 N° 3 del Código Civil, la cosa juzgada es un modo de extinguir las obligaciones. Cita, asimismo, los artículos 175 y 177 del Código de Procedimiento Civil.

Aduce que se da la triple identidad requerida en cuanto:

A) Hay identidad legal de personas: pues son los actores individualizados, demandantes en ambos procesos; siendo además el Fisco de Chile el demandado en dichos juicios, por lo cual coinciden tanto la identidad física como legal-procesal de ambas partes.

B) En cuanto a la identidad legal de cosa pedida: siendo la indemnización por daño moral por responsabilidad civil extracontractual



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



objetiva e imprescriptible del Fisco de Chile, lo demandado en estos procesos.

C) En lo referente a la causa de pedir: Son la misma por la detención y asesinato de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, que sufrió en manos de agentes del Estado.

En relación a la procedencia de la excepción de cosa juzgada en el caso de autos, hace presente lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en fallo rol N° 20.520-2018, de fecha 14 de noviembre de 2019, en relación a la procedencia de la cosa juzgada en causas de Derechos Humanos, y su independencia con lo resuelto por tribunales internacionales. En el mismo sentido, menciona los fallos de la Excma. Corte Suprema rol N° 44.407-2020, de fecha 9 de noviembre de 2020 y rol N° 333.444-2020, de fecha 13 de agosto de 2021.

Afirma que el efecto de cosa juzgada de los fallos ejecutoriados prevalecen como un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico y no puede dejar de aplicarse ni aún a pretexto de supuesta imposibilidad conforme al derecho internacional.

Señala que, respecto del artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo dice el fallo transcrito, por otra parte, el artículo 63 de la Convención se encuentra ubicado en el Capítulo VIII, relativo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en la sección segunda de dicho capítulo, referido a la competencia y funciones de esa Corte, facultando exclusivamente a dicha Corte Interamericana para imponer condenas de reparación de daños y, por lo mismo, no impide la aplicación del derecho interno nacional ni de la institución de la prescripción en Chile.

Cita el artículo referido e indica que el mandato contenido en esa disposición está dirigido a la Corte Interamericana y no a nuestros



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Tribunales, quienes deben aplicar la normativa de derecho interno que rige la materia, siendo totalmente improcedente invocarlo para restar aplicación a lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la excepción de cosa juzgada.

Esgrime que la Corte Suprema en algunas sentencias recientes ha sostenido que, sobre la base de un control de convencionalidad, debe dejar de aplicarse la normativa interna desconociendo la cosa juzgada por la existencia de una norma que exigiría la reparación. Así por ejemplo lo ha sostenido en la sentencia Rol N° 104.558-2020 (argumentaciones similares en los Roles N° 36319-19 y N° 144348-22).

Añade que tal afirmación utiliza de un modo inadecuado el control de convencionalidad y olvida que este no puede ser invocado sin fijar con claridad y precisión sus contornos. Como ha afirmado la profesora Miriam Henríquez “la falta de uniformidad y certeza de los contornos y naturaleza del control de convencionalidad, genera interrogantes sobre la precisión y coherencia de su noción y alcances” (Henríquez, Miriam. 2018. Cimientos, auge y progresivo desuso del control de convencionalidad interno. Veinte interrogantes. Revista Chilena de Derecho 45 N° 2). Tal incertidumbre aconseja ser especialmente cautos al momento de inaplicar un precepto legal invocando una lectura parcializada de la Convención Americana de Derechos Humanos. De hecho, una interpretación del control de convencionalidad mucho más respetuosa del ordenamiento jurídico nacional es la que hace la profesora Angélica Benavides quien sugiere la necesidad de compatibilizar tanto el derecho interno como el derecho internacional. Así afirma que “la compatibilización deviene en la interpretación armónica y deferente por hacer convivir normas que contienen derechos en favor de la persona y que reflejan, ambas, voluntades soberanas del Estado en orden a un convencimiento de protección del ser humano. Si esta convivencia y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



compatibilidad es imposible vía interpretativa, se deberán activar mecanismos internos, sea de reforma, derogación, inaplicación, etc. que permitan solucionar un caso de antinomia infranqueable” (Benavides, María Angélica. Armonizar el derecho nacional y el derecho internacional. Un asunto de compatibilización. En M. Henríquez y M. Morales. El control de convencionalidad. Un balance comparado a 10 años de Almonacid Arellano vs Chile. Ediciones DER, p. 459.).

Expresa que, desde esta perspectiva, la correcta incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento interno no pasa por crear una especie de recurso de inaplicabilidad de precepto legal, ya no por inconstitucional, sino que por una pretendida contrariedad con el derecho internacional. Lo adecuado es observar el asunto a la luz de las normas en juego y compatibilizar los diversos ordenamientos sin sacrificar uno por los supuestos mandatos del otro.

Manifiesta que si al conocer de esta causa el tribunal actúa de tal forma, podrá concluir que no puede simplemente inaplicarse las reglas de derecho interno que regulan la cosa juzgada porque esta es una institución que, también para el derecho internacional, ocupa un lugar central. No se trata entonces, sobre la base de un discutible control de convencionalidad que tendría el efecto de inaplicar normas, de decidir que la cosa juzgada regulada en el derecho interno debe ser olvidada para proteger normas del derecho internacional. La fórmula de compatibilizar ambos ordenamientos es comprendiendo que también el derecho internacional reconoce, valora y protege la cosa juzgada.

Afirma que la cosa juzgada es una institución antigua y reconocida en el derecho nacional e internacional. La Corte Internacional de Justicia la tiene consagrada entre aquellos principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas. Otras cortes la consideran una “esencial y



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



asentada regla de derecho internacional” y “un principio fundamental, universal y absoluto del derecho de las naciones”. Su reconocimiento es tan amplio que incluso la Corte Europea de Justicia ha resuelto innumerables casos fundándose en la cosa juzgada, aun cuando las reglas de dicha Corte no reconocen expresamente este principio. Lo mismo puede apreciarse cuando se analiza el sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derecho Humanos ha destacado la importancia de la seguridad jurídica la que se vincula íntimamente con la cosa juzgada. Así ha señalado que “el marco legal debe brindar seguridad jurídica al ciudadano”. Y ha vinculado esta certeza con el efecto de cosa juzgada que producen las sentencias de los tribunales de justicia. Así lo ha señalado al afirmar que “una sentencia con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento. Lo contrario supone la negación misma del derecho involucrado”.

Refiere que pese a que no hay en los instrumentos internacionales interamericanos un reconocimiento expreso al principio de la cosa juzgada, su configuración jurídica se ha ido consolidando. Tanto así, que hoy incluso se reconoce que las sentencias de tribunales internacionales gozan de “cosa juzgada internacional” reconociendo así que ya no solo los sistemas jurídicos domésticos se levantan sobre la seguridad jurídica que entrega la cosa juzgada, sino que también el de las cortes internacionales.

Afirma que, al decir de Savigny, “una larga experiencia y las leyes de diferentes pueblos atestiguan que la incertidumbre del derecho ha sido considerada como el mal mayor, y para prevenirlo ha habido que recurrir a una institución del derecho positivo. No se hacían ilusiones sobre el peligro opuesto, el de mantener irrevocablemente las decisiones injustas; pero este peligro es en sí mismo mucho menor (...) La institución, en extremo



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



importante, destinada a llevar el fin propuesto, puede definirse en general por la autoridad de la cosa juzgada, es decir, una ficción de verdad que protege las sentencias definitivas contra todo ataque y toda modificación”.

Habiendo destacado la relevancia de la “cosa juzgada” ya no solo en el ordenamiento jurídico interno, sino que también para el derecho internacional, menciona que es necesario abordar una argumentación que se ha planteado en ocasiones en el sistema interamericano contra la cosa juzgada, en ciertas circunstancias. Se trata de la denominada “cosa juzgada fraudulenta” que, por ser tal, no puede desplegar los mismos efectos que la cosa juzgada.

Refiere que como la propia Corte Interamericana lo ha señalado, la cosa juzgada fraudulenta “resulta de un juicio en el que no se han respetado las reglas del debido proceso, o cuando los jueces no obraron con independencia e imparcialidad”. Y en fallos posteriores, ha elaborado con mayor profundidad el alcance de la cosa juzgada fraudulenta, al establecer tres criterios necesarios para que sea procedente reclamar fraude:

a) la actuación del tribunal que conoció el caso y decidió sobreseer o absolver al responsable de una violación a los derechos humanos o al derecho internacional obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal;

b) el procedimiento no fue instruido independiente o imparcialmente de conformidad con las debidas garantías procesales, o

c) no hubo la intención real de someter al responsable a la acción de la justicia.

Esgrime que la cosa juzgada fraudulenta tiene contornos muy precisos que impiden aplicarla para el caso que se analiza. Ante todo, porque en el concepto desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, la misma aplica solo a la jurisdicción criminal y no a la civil.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Sostiene que aquí se trata de demandas de responsabilidad civil, donde se solicita una indemnización derivada de las actuaciones de los agentes del Estado tras el golpe de Estado del año 1973, al que fue sometida la hermana de los demandantes, en ningún caso se trata de sustraer a dichos agentes del Estado de su responsabilidad penal, lo que no ha sido discutido en autos.

Refiere que en el juicio anterior, el juez de primera instancia, el tribunal de segunda instancia y la E. Corte Suprema, como jueces independientes, rechazaron la pretensión de los demandantes, con pleno respeto a las garantías del debido proceso, aplicando las normas pertinentes al caso concreto, lo que generó como resultado el rechazo de la demanda.

Argumenta que, de esta forma, no puede entenderse que existe cosa juzgada fraudulenta, sino que lo que existió fue una interpretación diversa de las normas jurídicas. Los jueces que decidieron en su momento resolvieron con independencia e imparcialidad; sin intenciones ocultas ni ningún otro elemento subjetivo que pueda inducir que se está ante una cosa juzgada que no tiene el valor de tal.

Asevera que la Corte Suprema ha reconocido que las sentencias internacionales no pueden entrar en conflicto con instituciones fundamentales del derecho como lo es la cosa juzgada; y si no lo pueden hacer sentencias de cortes internacionales respecto del caso específico que era objeto de la decisión del órgano internacional, mucho menos podrá exigirlo de casos respecto a los cuales no hay pronunciamiento alguno.

Aduce que en la sentencia de la Corte Interamericana del denominado caso “Norín Catriman”, el pleno declaró que las sentencias de la Corte de Apelaciones de Concepción que habían sido revisadas por la Corte Interamericana habían “quedado sin efecto”. Sin embargo, al hacerlo, dejó expresa constancia de lo siguiente: “Esta Corte considera que el único





remedio posible de disponer en el caso que se revisa es declarar que las sentencias condenatorias abordadas por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han perdido todo efecto, lo cual se constata por las razones de fondo ya invocadas, como asimismo por las medidas que ya se han adoptado por el Estado de Chile en torno a ellas. Decisión que no importa la invalidación de los referidos fallos, atento a los efectos procesales que en el orden nacional se asigna a la nulidad de las resoluciones judiciales, manteniendo la validez de tales sentencias en cuanto a la cosa juzgada, como es la imposibilidad de rever el conflicto que dio origen a los procesos que se revisan.”

Agrega que similar valoración de la cosa juzgada frente a procesos internacionales tiene la Corte Suprema argentina, según puede apreciarse del caso “Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el caso ‘Fontevicchia y D’Amico vs. Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Indica que ambas sentencias dan cuenta de la centralidad de la cosa juzgada como institución de nuestro derecho, cuestión que ni siquiera sentencias de tribunales internacionales pueden erosionar; y si no lo puede hacer respecto de las sentencias que fueron objeto de pronunciamiento por las cortes internacionales, menos podrá cuestionarse la cosa juzgada cuando no ha habido pronunciamiento alguno de una corte internacional en el caso que, en estos autos, generó el efecto de cosa juzgada.

Por último, recalca que los tribunales no pueden “revivir procesos fenecidos”.

Esgrime que no debe olvidarse lo ya argumentado, en relación a lo que nuestro ordenamiento constitucional dispone en su artículo 76. De esta forma reitera que la frase final consagra con claridad absoluta la cosa juzgada en nuestra Carta Fundamental. Por tanto, si ni el Presidente ni el





Congreso Nacional pueden hacer revivir procesos fenecidos, tampoco podrán hacerlo los tribunales de justicia, pues a ellos también les aplica la norma contenida en el artículo 7 de la Constitución.

Argumenta que, en consecuencia, ninguna interpretación de alguna norma de derecho internacional puede servir de base para que los tribunales nacionales revivan procesos fenecidos y dejen sin efecto la cosa juzgada de que gozan sentencias firmes y ejecutoriadas, dictadas por los tribunales chilenos en ejercicio pleno y legítimo de sus facultades.

Añade que si lo que se quiere es que una decisión sea revisada a la luz de la decisión de una corte internacional, como lo muestra el caso español, será necesario legislar al respecto sin que, en ninguna circunstancia, ello permita revivir procesos fenecidos. En efecto, la experiencia española da cuenta de una modificación a su Ley Orgánica del Poder Judicial el año 2015 que incorporó un nuevo artículo 5° bis al mencionado cuerpo legal. Por medio de esta norma legal es que se autoriza al Tribunal Supremo español a conocer del recurso de revisión en caso de sentencias que, en conformidad a alguna declaración del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hayan sido dictadas vulnerando los convenios y protocolos sobre derechos humanos. Solo en tal caso es posible revisar alguna decisión, sin que sea posible en nuestro derecho, como pretende el demandante, olvidar el efecto de cosa juzgada cuando la Constitución lo prohíbe y la ley no contempla en tales casos una revisión de la sentencia ya dictada.

Refiere que en vista de todo lo anteriormente argumentado, la cosa juzgada se considera, clara y explícitamente, como uno de los efectos de la sentencia, o como su específica eficacia, para que aquellos a quienes aprovecha el fallo, “impidan, definitiva o irrevocablemente, todo pronunciamiento posterior, sea en el mismo u otro sentido, esto es, con idéntico o diverso contenido y en el mismo o en otro proceso (exceptio res



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



iudicate), concurriendo los presupuestos, requisitos, condiciones y modos correspondientes y, muy en especial, la triple identidad de que trata el ya citado art. 177 del Código de Procedimiento Civil chileno”.

Añade que, sin perjuicio de acompañar copias de las sentencias, en un otrosí de su escrito se solicita que se traigan a la vista el proceso civil del 26° Juzgado Civil de Santiago, con el objeto de que el tribunal pueda cerciorarse del sentido y alcance de la demanda civil indemnizatoria y la sentencia definitiva dictada y ejecutoriada, junto con su consecuente efecto de cosa juzgada, opuesta como excepción por el Fisco de Chile.

A continuación, alega la improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas, por preterición legal de los demandantes don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y doña Susana Ximena Barra Rosales, en calidad de hermanos de la víctima Jenny Barra Rosales, y además por haber sido reparados en la forma que se expresará.

Afirma que respecto de la demanda de los actores, quienes han deducido demanda en su calidad de hermanos de la víctima doña Jenny Barra Rosales, opone la excepción de improcedencia de la indemnización demandada, por haber sido preteridos legalmente.

Refiere que la indemnización solicitada se desenvuelve en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la llamada “Justicia Transicional”. Sólo desde esa óptica pueden analizarse y comprenderse los valores e intereses en juego en materia indemnizatoria, porque en este ámbito se ha de atender tanto a la necesidad de que la sociedad reconozca los errores del pasado, como a la necesidad de decidir qué proporción de los recursos públicos deberá ser destinada a reparar a las víctimas. Ello es así porque no es posible omitir el hecho que las arcas fiscales deben satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



pero así también, lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron los más directamente afectados en los procesos de violación a los derechos humanos.

Menciona que no es extraño que muchas de las negociaciones privilegien a algunos grupos en desmedro de otros; se compensen algunos daños y se excluyan otros; o se fijen legalmente, luego de un consenso público, montos, medios de pago o medidas de daño. En este escenario, la Ley 19. constituyó un esfuerzo de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero, con lo que permitió y permite que numerosas víctimas obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos.

Señala que en términos de costos generales para el Estado, este tipo de indemnizaciones ha significado, a diciembre de 2019, en concepto de:

a) Pensiones: la suma de \$247.751.547.837.- como parte de las asignadas por la Ley 19.123 (Comisión Rettig) y de \$648.871.782.936.- como parte de las asignadas por la Ley 19.992 (Comisión Valech);

b) Bonos: la suma de \$41.910.643.367.- asignada por la Ley 19.980 (Comisión Rettig) y de \$23.388.490.737.- por la ya referida Ley 19.992; y

c) Desahucio (Bono compensatorio): la suma de \$1.464.702.888.- asignada por medio de la Ley 19.123.-

d) Bono Extraordinario (Ley 20.874): la suma de \$23.388.490.737.-

En consecuencia, a diciembre de 2019, el Fisco había desembolsado la suma total de \$992.084.910.400.-.

Hace presente que el impacto indemnizatorio de este tipo de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



reparaciones ha sido alto, y son una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos, obteniéndose con ello compensaciones económicas razonables, que resultan coherentes con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

Advierte que para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal que optó por beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral.

Sostiene que ello no es ajeno a otras normativas, en que, ante el *pretium doloris*, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto.

Aduce que en el Derecho Comparado, en el Common Law, se alude al concepto de “loss of consortium”; esto es, el derecho a la reparación por perder al cónyuge o hijo, reduciéndolo a personas determinadas. En el Derecho estadounidense se alude al concepto de “loss of society”, que se refiere a la noción de control o poder marital. Por su parte, en Inglaterra, se menciona el “dependant law”, en donde ocupan el primer y excluyente lugar el o la cónyuge y los hijos.

Expresa que en nuestro Derecho se pueden traer a colación distintas normas, entre ellas, el artículo 43 de la Ley N° 16.744, que prescribe que producida la muerte de un afiliado por accidente del trabajo o enfermedad profesional o si fallece el inválido pensionado, tendrán derecho de pensiones de supervivencia el cónyuge, hijos, madre de sus hijos naturales y los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



ascendientes o descendientes que le causaban asignación familiar. Así también, las normas sucesorias de los artículos 988 y siguientes del Código Civil establecen una prelación, en que los asignatarios más directos excluyen al resto.

Manifiesta que es claro que, siendo los recursos escasos, tiene que haber un límite que ponga fin a la línea de extensión reparativa y en el caso de las referidas demandantes, fueron preteridas por la ley como beneficiarias de una asignación en dinero por el daño que invocan, en beneficio de la cónyuge e hijo, sin que ello implique afirmar que no hayan obtenido una reparación satisfactoria por otra vía.

Esgrime que las pretensiones económicas demandadas son improcedentes porque, en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a los hermanos de los causantes.

Luego, refiere que sin perjuicio de lo anterior, los actores preteridos han obtenido de todas formas reparación satisfactoria.

Argumenta que el hecho que los actores no hayan tenido derecho a un pago en dinero, por la preterición legal, no significa que no hayan obtenido reparación por el daño sufrido, por lo que alega la satisfacción de éste.

Manifiesta que tratándose de un daño extra patrimonial, su compensación no se desenvuelve necesariamente en el aspecto netamente económico, sino que es posible reparar mediante la entrega de otras importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer al daño moral sufrido.

Arguye que no debe olvidarse que, desde la perspectiva de las víctimas por repercusión, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Mal que mal, el éxito de los procesos penales se concentra



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



sólo en el castigo a los culpables no preocupándose del bienestar de las víctimas. En este sentido, las negociaciones entre el Estado y las víctimas revelan que tras toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas, a la satisfacción de otras radicadas en grupos humanos más específicos. Este concurso de intereses o medida de síntesis se exhibe normalmente en la diversidad de contenidos que las comisiones de verdad o reconciliación proponen como programas de reparación.

Afirma que estos programas incluyen beneficios de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas diversas a la simple entrega de una cantidad de dinero. En este sentido, las transiciones han estado basadas en complejas negociaciones. Basta para ello revisar las discusiones originadas en la aprobación de la ley N° 19.123 para darse cuenta del cúmulo de sensibilidades e intereses en juego en ella. Al respecto, la llamada Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en su Informe Final, planteó una serie de “propuestas de reparación”, entre las cuales se encontraban diversas prestaciones, no solamente pecuniarias, siendo estas últimas reservadas sólo para la denominada familia nuclear, lo que hizo necesario considerar otra suerte de medidas para diversos afectados.

Destaca que ello se desprende del concepto que el Ejecutivo entendió por reparación, esto es: "un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le cabe al Estado en los hechos y circunstancias que son materia de dicho Informe". De esta forma, en la discusión de la ley 19.123 se hizo referencia a la reparación “moral” buscada por el proyecto. En este sentido, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se concretó también por reparaciones simbólicas, y no meramente pecuniarias, a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas





violaciones y que permitieran recuperar el honor, dignidad y buen nombre. Este tipo de acciones pretende reparar, ya no a través de un pago de dinero paliativo del dolor sino precisamente tratando de entregar una satisfacción a esas víctimas que logre reparar el dolor y la tristeza actual y con ello reducir el daño moral.

Expone que la doctrina se ha inclinado por estimar que la indemnización del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables.

Cita doctrina.

Puntualiza que en el caso de personas como las de autos, las satisfacciones reparativas se orientaron en una línea distinta a la meramente económica, entre otras, la ejecución de diversas obras de reparación simbólica, que enumera, todas ellas unidas a un sinnúmero de otras obras menores. Añade que los actores son titulares por ley de Programas de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS).

Concluye que el cúmulo de reparaciones indicadas ha producido satisfacción de los mismos daños cuya reparación se persigue. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación, al haber compensado precisamente aquellos daños, no pueden, por ello, ser exigidos nuevamente.

Menciona que diversas sentencias han insistido en que el propósito de estas leyes fue precisamente “reparar el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas”, lo que constituye un factor congruente con resoluciones de tribunales internacionales, relativas a la procedencia de la indemnización.

Afirma que órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han valorado positivamente la política de reparación de violaciones de derechos humanos desarrollada por Chile, a tal punto que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



han denegado otro tipo de reparación pecuniaria, luego de tomar en consideración los montos ya pagados por el Estado por conceptos de pensiones, beneficios y prestaciones públicas a los familiares más directos.

Hace presente que estando las acciones deducidas por don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales y doña Susana Ximena Barra Rosales, basadas en los mismos hechos y pretendiendo ellas indemnizar los mismos daños que han inspirado el cúmulo de acciones reparatorias enunciadas, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizadas en cuanto al daño sufrido por el secuestro y asesinato de su hermana doña Jenny Barra Rosales, mediante el conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

Luego, opone respecto a las acciones indemnizatorias la excepción de prescripción extintiva con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil, en relación con lo dispuesto en el artículo 2497 del mismo Código, solicitando que, por encontrarse prescritas éstas, se rechace la demanda en todas sus partes.

Refiere que según lo expuesto en la demanda, el secuestro y asesinato de la víctima doña Jenny Barra Rosales se produjo en octubre de 1977.

Asevera que, aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, por la imposibilidad de las víctimas o sus familiares de ejercer las acciones legales correspondientes ante los tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aún, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, a la fecha de notificación de la demanda, esto es, el 21 de febrero de 2023, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2332 del Código Civil.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



En consecuencia, opone la excepción de prescripción de 4 años establecida en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, en caso de que el tribunal estime que la norma anterior no es aplicable al caso de autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada en el artículo 2515, en relación con el artículo 2514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la acción civil que contesta, transcurrió con creces el plazo que establece el citado artículo 2515 del Código Civil.

Destaca que, por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, y por ende, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones graves y perturbadoras.

Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público, y las normas del Código Civil se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no sólo al derecho privado. Cita el artículo 2497 del cuerpo legal citado, el cual consagra, con carácter obligatorio, el principio de que la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como lo señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por leyes y reglamentos especiales.

Explica que la prescripción es una institución de aplicación general en todo el ámbito jurídico y de orden público, pues no cabe renunciarla anticipadamente (artículo 2494, inciso 1º, del Código Civil).

Manifiesta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, conforme con los artículos 2514 y 2515 del Código Civil.

Hace presente que la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Por ello es posible, sin duda, que la prescripción se produzca sin que el acreedor haya recibido lo que le corresponda y sin que haya tenido, con ello, intención de remitir la deuda de que se trate. Al acreedor tendrá que reprocharse una grave negligencia, pero, por encima de su interés personal, se impone la necesidad de fijar un término a las acciones. En la práctica, los pocos casos en que la prescripción produce resultados chocantes, ellos no pueden compararse con los infinitos casos en que viene a consolidar y a proteger situaciones regulares y perfectamente justas. La prescripción extintiva, un modo de extinción de las obligaciones, es llamada con bastante propiedad por la doctrina como un modo de liberación de las obligaciones, o sea, algo más que su extinción.

Aduce que la prescripción es una institución estabilizadora. Está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe un bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas.

Hace presente que por las mismas razones es preciso consignar que la prescripción no es una sanción para los acreedores y un beneficio para los deudores. Sanción o beneficio no son más que consecuencias indirectas de la protección del interés general ya referido. Resulta inaceptable presentar a la prescripción extintiva como una institución abusiva de exención de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



responsabilidad, contraria o denegatoria del derecho a reparación contemplado en la Constitución Política y en los Tratados Internacionales.

Advierte que la prescripción no exime la responsabilidad ni elimina el derecho a la indemnización. Solamente ordena y coloca un necesario límite en el tiempo para que se deduzca en juicio la acción. Por otro lado, no hay conflicto alguno entre la Constitución Política y la regulación del Código Civil. Lo habría si aquellos textos prohibieran la prescripción o si el derecho interno no admitiere la reparación vía judicial oportunamente formulada. En ausencia de ese conflicto, no hay contradicción normativa.

Arguye que el ejercicio de las acciones ha sido posible durante un número significativo de años, desde que la demandante estuvo en situación de hacerlo.

Menciona que nuestra Excma. Corte Suprema, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 780 del Código de Procedimiento Civil dictó, el 21 de enero de 2013, una histórica sentencia de unificación de jurisprudencia de demandas de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por hechos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, y en dicha sentencia, nuestro Máximo Tribunal en Pleno, zanjó esta controversia, señalando:

1º) Que el principio general que debe regir la materia es el de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva;

2º) Que los tratados internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establecen se refiere sólo a la responsabilidad penal;

3º) Que no existiendo una norma especial que determine qué plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos, debe recurrirse al derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto;

4º) Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado (detención del demandante en este caso), sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia.

5º) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde este momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la persona desaparecida.

Hace presente que existen numerosos fallos dictados por la Excma. Corte Suprema en los que se ha reconocido expresamente el carácter prescriptible de las acciones indemnizatorias por hechos análogos al de autos.

Indica que las sentencias posteriores no hacen más que reiterar la misma doctrina, constituyendo jurisprudencia contundente en la materia, lo que solicita se tenga en consideración al momento de resolver la presente Litis, tal como ha resuelto el Pleno de nuestro Excmo. Tribunal, en sentencia de fecha 21 de enero de 2013.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Sostiene que la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de la misma, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago, y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté expuesta a extinguirse por prescripción.

Advierte que como reiteradamente se ha planteado por la doctrina fiscal y lo ha recogido la reiterada jurisprudencia, en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraría la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece al ámbito patrimonial.

Afirma que basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos de disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de una acción ajena a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tácita por el no ejercicio oportuno de la misma.

Expone que en relación con las alegaciones expuestas por todos los actores en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, basándose en ciertos instrumentos internacionales, concluye que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia.

Expresa que su planteamiento ha sido reconocido por la Excma. Corte Suprema, que ha desestimado la aplicación de esa normativa en diversos fallos, como lo ha establecido conociendo del recurso de casación



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



interpuesto en los autos N° 1.133-06, caratulados “Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile”, de 24 de julio de 2007, y lo mismo aconteció en la sentencia dictada por la Excm. Corte Suprema, acogiendo un recurso de casación en el fondo deducido por el Fisco, en la causa “Martínez Rodríguez y otra con Fisco de Chile”, autos N° 4.067-2006, en fallo de fecha 29 de octubre de 2007.

Refiere que no habiendo norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, que establecen las reglas sobre prescriptibilidad de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Concluye que, con el mérito de lo expuesto precedentemente, el tribunal deberá rechazar la demanda por encontrarse prescritas las acciones civiles deducidas.

En subsidio de las defensas y excepciones precedentes, formula las siguientes alegaciones en cuanto a la naturaleza de la indemnización solicitada y al excesivo monto pretendido.

Indica que los demandantes ejercen sus acciones de carácter indemnizatorio por daño moral y solicitan, por este concepto, la suma de \$100.000.000.- para cada uno de ellos, monto que resulta excesivo.

Con relación al daño moral, hace presente que no puede dejar de considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. Así, entonces, los llamados daños no patrimoniales recaen sobre elementos de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



difícil o imposible estimación pecuniaria, ya que su contenido no es económico, o al menos no directamente. Ello produce a su respecto una imposibilidad latente e insuperable de evaluación y apreciación pecuniaria.

Indica que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido, para ponerla en el mismo estado que tenía antes del acto dañoso.

Manifiesta que tratándose del daño puramente moral, por afectar a bienes extra patrimoniales o inmateriales y, por lo mismo, no apreciables en dinero, la indemnización no hace desaparecer el daño, ni tampoco lo compensa en términos de poner a la víctima en situación equivalente a la que tenía antes de producirse aquél. El daño moral no se borra por obra de la indemnización. La pérdida o lesión producida por él permanece, a pesar de la indemnización.

Sostiene que, por ende, la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino sólo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva.

Señala que es en la perspectiva antes indicada que hay que regular el monto de la indemnización que debe ser un procedimiento destinado a atenuar los efectos o el rigor de la pérdida extrapatrimonial sufrida.

Refiere que no habiendo norma legal que establezca una excepción relativa a la capacidad económica del responsable de un hecho delictual o cuasidelictual, habrá de estarse al principio general y básico de la cuantificación conforme a la extensión del daño, con absoluta prescindencia



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



del patrimonio obligado al pago. Advierte que las cifras pretendidas en las demandas como compensación del daño moral resultan excesivas, teniendo en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado y los montos promedios fijados por los tribunales, que en esta materia han actuado con mucha prudencia.

En subsidio de las alegaciones precedentes de cosa juzgada, preterición, reparación satisfactiva, y de prescripción, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los tribunales.

Alega que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el tribunal debe considerar, en lo que corresponda, los pagos recibidos a través de los años por los actores por parte del Estado conforme a las leyes de reparación (19.123; 19.980) y también los beneficios extra patrimoniales que estos cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tienen por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces.

Arguye que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los tribunales en esta materia.

Además, hace presente que los reajustes sólo pueden devengarse en el caso de que la sentencia que se dicte en la causa acoja la demanda y establezca esa obligación, y además desde que la sentencia se encuentre firme o ejecutoriada.

Indica que, a la fecha de notificación de la demanda que contesta, y mientras no exista sentencia, firme o ejecutoriada, ninguna obligación de indemnizar ha sido establecida, y por tanto no existe ninguna suma que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



deba reajustarse.

Afirma que lo anterior implica que los reajustes que procedieren de ninguna manera podrían contabilizarse desde una fecha anterior a aquella en que la sentencia que los concede se encuentre firme o ejecutoriada, como lo pide el demandante.

Explica que el reajuste es un mecanismo económico-financiero que tiene por objeto neutralizar el efecto que los procesos inflacionarios o deflacionarios tienen sobre la moneda de curso legal. Desde esta perspectiva, resulta improcedente pretender aplicar la corrección monetaria a partir de una fecha que precede a la determinación del monto por sentencia ejecutoriada.

Respecto de los intereses, expone que el artículo 1551 del Código Civil establece que el deudor no está en mora sino cuando ha sido judicialmente reconvenido y ha retardado el cumplimiento de la sentencia, y la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores así lo ha decidido. Por consiguiente, en el caso de que el tribunal decida acoger las acciones y condene a su representado al pago de una indemnización de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

En mérito de ello, alega la improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma en que han sido solicitados en las demandas señaladas.

En consecuencia, solicita tener por contestada la demanda y, en definitiva, acoger las excepciones y defensas opuestas, y rechazar las acciones en todas sus partes, con costas; y, en subsidio, fijar el monto de la o las indemnizaciones que pudieren corresponder, teniendo presente todo lo expuesto y los beneficios patrimoniales y extra patrimoniales ya percibidos a través de las leyes de reparación.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



**Con fecha 4 de abril de 2023, a folio 12,** la parte demandante evacúa el trámite de la réplica, reiterando todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, los que da por reproducidos, agregando ciertas consideraciones.

**I. Sobre la excepción de cosa juzgada.**

Refiere que la demandada alega que sus representados habrían ejercido una acción de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile por los mismos hechos alegados en la presente causa, habiéndose dictado sentencia ejecutoriada en causa Rol C-3302-2003 por el 26° Juzgado Civil de Santiago. En dicha sentencia, se acogió la excepción de prescripción extintiva de la acción civil, criterio que fue confirmado tanto por la Iltna. Corte de Apelaciones de Santiago como por la Excm. Corte Suprema.

Hace presente que ante esto, y sin perjuicio de que efectivamente el asunto de fondo discutido en aquel juicio entablado ante el 26° Juzgado Civil de Santiago el año 2003 versaba sobre las reparaciones a las que tienen derecho los familiares de las víctimas (en este caso los familiares de doña Jenny Barra Rosales), cree que la excepción de cosa juzgada planteada debe rechazarse, en virtud de la imprescriptibilidad de las acciones civiles que emanan de crímenes contra la humanidad, y por las razones que expondrá.

a. Sobre el cambio jurisprudencial en los Tribunales Superiores de Justicia chilenos en relación a la aplicación de la prescripción de las acciones civiles emanadas de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Explica que en relación a la aplicación de la prescripción en estos casos, desde principios de la década de los años 2010, existió dentro de los tribunales de justicia chilenos, y primeramente en los tribunales superiores de justicia, un cambio en el criterio jurisprudencial, el que cambió la suerte



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



de todas aquellas acciones civiles presentadas por los familiares de las víctimas y víctimas directas de los crímenes cometidos durante la dictadura cívico- militar. Este cambio ha significado a la fecha, más de 190 fallos donde sin excepción se rechaza la aplicación de la prescripción, consolidando el criterio en el sentido de otorgar reparación.

Relata que en este cambio tuvieron incidencia varios factores. Por una parte, el cambio de composición de la Segunda Sala Penal de la Excma. Corte Suprema, y con ello el comienzo de una adecuación de las resoluciones de los tribunales a los estándares internacionales sobre derechos humanos en esta materia, sobre todo cuando se está ante crímenes de lesa humanidad, que imponen a los Estados la obligación de reparar adecuadamente a las víctimas. Con ese deber en consideración, excepciones como la prescripción comenzaron a ser rechazadas, acogándose las demandas civiles presentadas. Un segundo factor fue que ya desde el año 2014, mediante el Auto Acordado de fecha 26 de diciembre de ese año dictado por la Excma. Corte Suprema, el conocimiento de las causas civiles derivadas de los crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra cometidos durante la dictadura cívico-militar en Chile pasaron de conocerse en la Tercera Sala Constitucional a conocerse en la Segunda Sala Penal del Máximo Tribunal, lugar donde se selló el criterio respecto a estas acciones.

Narra que desde ese tiempo a esta parte, no existe hoy ningún Juzgado Civil de Santiago (salvo muy excepcionales casos, cuyos fallos han sido revocados por la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago), ningún Ministro en Visita Extraordinaria o de Fuero que investiga causas por violaciones a los derechos humanos, ninguna Sala de la Itma. Apelaciones de San Miguel o Santiago, ni de la Excma. Corte Suprema, que acoja la excepción de prescripción. El avance ha sido sostenido y sustancial, en el sentido de que nuestros tribunales han adaptado su actuar para cumplir las





obligaciones a las que Chile se ha comprometido internacionalmente, haciendo prevalecer las normas que componen el derecho internacional de los derechos humanos -que además tienen rango constitucional en nuestro ordenamiento jurídico, en razón de lo establecido en el artículo 5° inciso segundo de la Constitución- por sobre las normas del derecho interno que transgredan dichas normas internacionales.

Sostiene que hoy ningún tribunal cuestiona la imprescriptibilidad penal de los crímenes de lesa humanidad, como asimismo la imprescriptibilidad de las acciones civiles que emanan de los mismos. Y sobre el particular, esta imprescriptibilidad que garantiza la persecución penal y la reparación de las consecuencias a los familiares y víctimas, se basa en que las normas de prescripción son normas legales de derecho interno que atentan contra el cumplimiento de obligaciones internacionales y en contra del acatamiento de los tratados internacionales que regulan la materia, además de atentar en contra de normas de ius cogens. En este tópico se ha discutido que no se puede invocar una norma de derecho interno para desconocer el derecho internacional y las obligaciones que versan sobre el Estado de Chile. Prevalecen siempre así los principios establecidos en los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena.

Cita el inciso 2° del artículo 5 de la Constitución, y afirma que siguiendo esta norma no se puede sino concluir que, siendo la cosa juzgada también una norma legal que, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil es una manifestación de la soberanía, ella necesariamente limita con las garantías y el respeto a los derechos humanos y a los tratados internacionales sobre la materia. No se puede, entonces, anteponer esta norma simplemente legal y de derecho interno ante las normas obligatorias de derecho internacional de los derechos humanos y a las normas de ius cogens que obligan a reparar las consecuencias de tan horrendos crímenes.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Señala que este razonamiento de que resulta imposible la aplicación de normas de derecho interno en un caso como el de autos fue sostenido hace ya más de dos décadas por los Ministros Sres. Milton Juica, Sergio Muñoz, Hugo Dolmestch, Juan Araya, Carlos Kunsemuller, Haroldo Brito, Juan Escobar en el fallo de pleno Rol 10665-2001.

Manifiesta que otro ejemplo en la jurisprudencia es el criterio que sostuvo también el Ministro de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago don Jorge Zepeda, respecto de la alegación de cosa juzgada opuesta por la defensa de uno de los militares acusados en los autos Rol 2182-98 Episodio Álvaro Vallejos Villagrán, el cual ya había sido sobreseído definitivamente por la aplicación de la amnistía en un proceso previo.

Puntualiza que en cuanto al tema de la imprescriptibilidad de las acciones civiles emanadas de la comisión de crímenes de lesa humanidad, como el del presente caso, podemos decir que es un tema ya zanjado hoy por la Excma. Corte Suprema. Tanto es así, que las casaciones en el fondo presentadas por el Fisco de Chile han sido rechazadas in limine por manifiesta falta de fundamento.

b. Lo que ha establecido el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en relación a la prescripción de la acción civil.

i. El informe de fondo de la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso “María Laura Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, Caso 12.521.

Relata que durante los años 2003 y 2004 se presentaron distintas demandas civiles por parte de familiares de víctimas de crímenes de derecho internacional, todas ellas rechazadas por la justicia chilena en razón de acogerse la excepción de prescripción extintiva de la acción civil, al igual que el caso de sus representados, por lo que se interpusieron las correspondientes denuncias ante la Honorable Comisión Interamericana de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Derechos Humanos. En el caso “María Laura Órdenes Guerra y otros vs. Chile”, caso N° 12.521, se acumularon un total de siete casos, familiares de siete víctimas en total. Se alegó en dichas denuncias que el Estado de Chile incumplió obligaciones convencionales de carácter internacional, establecidas en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación a los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento internacional, denegando la reparación a las víctimas demandantes, familiares de las víctimas directas.

Menciona que, en este caso, la CIDH, en su informe de admisibilidad y fondo N° 52/16, concluye que “(...)con base en las declaraciones de hecho y de derecho contenidas en el presente informe, la Comisión concluye que el Estado de Chile es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículo 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en conexión con la obligación general de respetar los derechos de la Convención Americana y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidas en sus artículos 1.1 y 2 en perjuicio de las víctimas del presente caso”, y en torno a esto, hace dos recomendaciones al Estado de Chile, a saber:

1. Reparar a las víctimas por las violaciones declaradas en el presente informe. Como parte de esta reparación, el Estado debe adoptar medidas necesarias para ofrecer un recurso judicial efectivo para que las víctimas puedan presentar sus reclamos y obtener una decisión en materia de reparaciones. El cumplimiento de esta recomendación es independiente del programa de reparaciones administrativas.

2. Adoptar medidas de no repetición. En particular, medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas judiciales chilenas a los estándares descritos en el presente informe respecto de la prohibición de aplicar la



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



prescripción a las acciones civiles de reparaciones en casos como el presente.

Expresa que existe, entonces, un pronunciamiento expreso de la Honorable CIDH sobre las vulneraciones que se han cometido en contra de los derechos de las víctimas en relación a su derecho a una reparación adecuada ante crímenes de esta naturaleza.

ii. La sentencia de fondo, reparaciones y costas pronunciada por la Excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile”, Rol CDH-2-2017.

Añade que ya existe fallo en relación a la causa “Órdenes Guerra”, mediante la cual se obliga al Estado de Chile al pago de reparaciones pecuniarias en favor de los peticionarios, entre otras medidas de reparación, con fecha 29 de noviembre de 2018, refiriéndose el fallo a la excepción de cosa juzgada.

Aduce que la Corte Interamericana hace precisiones que son de toda relevancia para el caso. Primero, hace expresa referencia a la importancia de la cosa juzgada, pero también hace hincapié en el hecho de que el Estado de Chile, al rechazar las demandas por acoger la excepción de la prescripción, ha incurrido en una violación de los derechos fundamentales de los peticionarios, y debe hacer algo al respecto, expresando la Corte que ha establecido en otros casos, como medida reparación, dejar sin efecto tales decisiones (resoluciones que produzcan efecto de cosa juzgada). Hay un reconocimiento por parte de la Corte de que las víctimas no pueden quedar sin reparación por los horribles crímenes cometidos en las personas de sus familiares, los que, por cierto, dejaron en ellos daños enormes.

Asevera que ejemplos de lo que viene explicando sobre que la cosa juzgada no es una institución infalible hay muchos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Refiere el caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana, sentencia de fondo, reparaciones y costas de fecha 24 de



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



octubre de 2012. En términos similares se pronunció la Excma. Corte en la causa Almonacid Arellano y otros vs. Chile, en la sentencia de fondo, reparaciones y costas de fecha 26 de septiembre de 2006.

Destaca que esta última sentencia es de vital importancia. Fue la Iltrma. Corte de Apelaciones de Rancagua la que tuvo que fallar y hacer cumplir lo establecido por la Excma. Corte Interamericana en el caso, en fallo causa Rol 103-2011 de fecha 14 de febrero de 2013.

Señala que cree firmemente que al aplicar la cosa juzgada a las reparaciones por crímenes de lesa humanidad, basándose en un juicio anterior en que la Excma. Corte Suprema declaró prescrita la acción, haciendo caso omiso a la normativa internacional que correspondía aplicar, se vuelve a denegar justicia a los familiares de las víctimas por segunda vez, a sabiendas que dichos fallos hacen incurrir al Estado en una nueva violación a las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, volviendo a victimizar a los familiares y actores civiles, obligándolos a presentar en el futuro la correspondiente denuncia al Sistema Interamericano de Protección de Derechos, sabiendo que pasarán muchos años antes de que puedan ver solucionada su situación de indefensión.

c. Lo que ha manifestado el Estado de Chile en el foro internacional: el reconocimiento de responsabilidad internacional.

Expone que en la misma causa “María Laura Órdenes Guerra y otros vs Chile”, el Estado de Chile presentó su escrito de contestación en el mes febrero del año 2018, formulando un reconocimiento expreso de responsabilidad internacional.

Aduce que en el mismo escrito, el Estado de Chile expresa una aceptación de ciertos hechos, y reitera que la prescripción no es aplicable en estos casos. Este reconocimiento de responsabilidad es de toda relevancia, porque es el mismo Estado el que está admitiendo que se ha cometido un



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



error y esto ha significado la violación de garantías que tienen las víctimas ante la comisión de este tipo de crímenes. Dicho reconocimiento no existía el año 2003 cuando sus representados decidieron buscar justicia por la vía civil, ante el nulo avance de la investigación criminal sobre lo que le ocurrió a doña Jenny Barra. Este reconocimiento, y la consecuente sentencia de la Corte Interamericana que lo toma en consideración para condenar al Estado de Chile, son un antecedente que altera el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, o sea, la causa de pedir, lo que significa que no se cumple con la triple identidad planteada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

d. Sobre el cambio jurisprudencial de la Excma. Corte Suprema en relación a excepción de cosa juzgada respecto de las acciones civiles emanadas de la comisión de crímenes de lesa humanidad.

Añade que en la actualidad la discusión ante los tribunales superiores de justicia se ha planteado ya no desde si es aplicable o no la prescripción respecto de la acción civil que emana de los crímenes de esta naturaleza, porque ya no existe en realidad discusión sobre aquello (porque no aplica), sino que se ha discutido sobre si la cosa juzgada que emana de dichos juicios donde se aplicó la prescripción, procede o no; y la Excma. Corte Suprema ha dicho ya claramente que no procede en estos casos.

Argumenta que la Excma. Corte Suprema ha sido categórica en sostener que la cosa juzgada es ineficaz en estos casos, no porque se haya cometido alguna ilegalidad en la sustanciación de los procesos, sino porque el deber de reparación hacia las víctimas es ineludible. Con esto se agrega también otro punto que no se tenía al momento de presentar la demanda original por estos demandantes: un pronunciamiento que da cuenta que ni siquiera la cosa juzgada puede significar el incumplimiento del deber de reparación. Este criterio asentado en la jurisprudencia actual también es un



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



nuevo antecedente que altera el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio, o sea, la causa de pedir, lo que significa que tampoco desde esta perspectiva se cumple con la triple identidad planteada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Recalca que con todo lo expuesto queda claro que en materia de crímenes de lesa humanidad se debe ser muy cuidadoso y restrictivo al momento de aplicar instituciones jurídicas propias del derecho interno que pudiere llevar a cometer nuevas infracciones a los derechos esenciales de las víctimas y de sus familiares cercanos. Invocar instituciones como la incompetencia, las amnistías, la prescripción y en este caso la cosa juzgada (basada en la prescripción), atentan de manera directa contra los derechos de los familiares y de las víctimas de lograr justicia frente a los crímenes cometidos por el Estado.

II. Sobre las alegaciones de excepción de preterición legal y reparación satisfactiva, supuestamente concurrentes contra los demandantes.

Esgrime que en cuanto a la alegación que hace el demandado consistente en excepción de preterición legal (de los hermanos, en este caso) y reparación satisfactiva, en consideración a que sus representados son hermanos de doña Jenny del Carmen Barra Rosales, por el motivo de que ya han sido preteridos e indemnizados por la ley 19.123 (y 19.980), que creó la “Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación”, le parece absolutamente errado, ya que, en el mejor de los casos, los montos que otorga la referida ley sólo constituye pensiones de sobrevivencia por los brutales actos cometidos por el Estado en el período comprendido entre 1973 y 1990. Dichas pensiones (pensiones de las cuales no gozan sus representados, por cierto, por el grado de parentesco con la víctima) y reparaciones simbólicas en ningún caso reparan íntegramente el dolor experimentado por los seres queridos de doña Jenny Barra, menos aún el



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



experimentado por familiares tan cercanos como sus hermanos, personas que vivían con ella y compartían su día a día, y eran enormemente cercanos, y es por tal motivo que se ha interpuesto la demanda. Con todo, nunca un tribunal de la República ha fijado el monto de la reparación que deben obtener estos familiares, por lo que no sería entonces un crédito líquido y actualmente exigible. Conforme con ello es evidente que desde el punto de vista jurídico no cabe acoger la excepción alegada.

Expresa que parece razonable que el Fisco reconozca por medio de sus alegaciones que se produjo un crimen de lesa humanidad y que ese crimen produjo un daño moral a las víctimas y demandantes que representa. Por lo demás “los pagos” que realiza el Fisco de Chile implican un acto real y un reconocimiento implícito y explícito de la responsabilidad que le cabe, extinguiendo de tal manera la prescripción de la acción que más tarde alega. Más aún reconoce el deber de indemnizar, cuestión que debiera hacer en todo caso con los demandantes.

Explica que en directa relación a lo anterior, la Ley N° 19.123, que el demandado esgrime como justificación para decir que el daño moral ya está resarcido, en su artículo 2 establece que “Le corresponderá especialmente a la Corporación (...) Promover la reparación del daño moral de las víctimas”. La palabra promover no es sinónimo de reparar, y en el caso de sus mandantes, no se ha reparado íntegramente el daño moral que padecen por el homicidio calificado de su hermano, y lo claro en este ámbito tan íntimo de su ser, es que el sentimiento de injusticia y de no haber sido reparados en modo alguno subsiste hasta el día de hoy.

Argumenta que la propia Ley 19.123 no considera incompatibles las reparaciones económicas y, menos entonces, las reparaciones simbólicas (o satisfactivas como la denomina el Consejo de Defensa del Estado) con una eventual indemnización de perjuicios que repare el daño moral, según el





tenor inequívoco de su artículo 24. Advierte que con menor razón podría el intérprete de la ley descartar la procedencia de la pretensión indemnizatoria por el solo hecho de haber existido reparaciones simbólicas y beneficios de salud para los dolientes que se encuentran en la misma situación de sus mandantes (porque, reitera, sus representados no han recibido indemnización económica alguna por los daños sufridos). En otras palabras, al no establecer las leyes en comento incompatibilidad alguna entre ser beneficiario de la pensión de reparación y demandar por daños en sede civil por el mismo asunto, resulta de suyo insostenible la excepción invocada por el Fisco de Chile.

Adiciona que así también lo han entendido los Tribunales Superiores de Justicia en forma reiterada. No cabe entonces que el demandado con una interpretación bastante particular y cuestionable desde el punto de vista jurídico trate de decir que, en base a la ley precitada, los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos estarían impedidos de demandar. Son más de 180 casos que vienen a confirmar que es compatible una indemnización en conjunto con la reparación establecida por dichas leyes. Si así no se entendiera, el Consejo de Defensa del Estado estaría haciendo discriminaciones que no se condicen con lo expresado en nuestra Constitución o al menos se estaría contradiciendo en sus aseveraciones.

Refiere jurisprudencia.

Cita el artículo 76 de la Constitución, en virtud del cual el razonamiento expuesto por el demandado no resulta concordante con la Carta Fundamental, ya que basarse en la Ley N° 19.123 para decir que el daño moral ya está reparado o preterido llevaría necesariamente a la conclusión de que el Congreso de Chile estaría avocándose al conocimiento y resolución de una causa judicial pendiente, y ello es abiertamente



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



inconstitucional. La misma Ley 19.123 se hace cargo de esto, en su artículo 4.

Manifiesta que si se aceptara la tesis Fiscal en el caso del monto de la reparación, meramente simbólica y no monetaria en este caso, que han recibido los demandantes, estaría fijada de forma unilateral y absolutamente arbitraria por el responsable, es decir, por el Estado de Chile, y le estaría vedado a las víctimas discutirlo. Claro está que un razonamiento así es contrario a cualquier principio básico del Derecho.

### III. Respecto a las fuentes de derecho aplicables al presente caso.

Aduce que le parece jurídicamente insostenible afirmar que las únicas reglas que existen en Chile para regular la responsabilidad del Estado son aquellas contenidas en el Código Civil. Tal afirmación es errónea por cuanto trae aparejada la negación rotunda de la validez y eficacia de otras normas jurídicas de carácter constitucional, administrativo e internacional que son sostenidamente aplicadas por nuestros tribunales superiores en materia de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo entre ellos a la Excelentísima Corte Suprema.

Esgrime que el demandado incurre en un error jurídico al sostener que este litigio se debe resolver haciendo uso de categorías propias del Derecho Privado. Para empezar, se debe tener presente que la argumentación invocada por la defensa fiscal resulta improcedente a la luz de la denominada doctrina de los actos propios así como a la buena fe que debe orientar las defensas de las partes, toda vez que se alega en autos la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” basado en que “el derecho común en materia de responsabilidad extracontractual, se encuentra contenido en nuestro Código Civil en el Título XXXV, denominado De los Delitos y Cuasidelitos, artículos 2314 y siguientes”.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



Refiere que esta última alegación resulta incompatible y contraria a la línea de defensa que históricamente ha planteado el Consejo de Defensa del Estado sosteniendo en latas argumentaciones los poderes exorbitantes de la Administración, reclamando privilegios que se apartan de la noción clásica del Derecho Público, donde sí reconoce la existencia de normas especiales que regulan la actividad administrativa, abogando por la teoría de los poderes implícitos por la función de servicio público que desarrolla. Igualmente, dicha institución ha negado jurisdicción y competencia a los tribunales ordinarios para conocer de las acciones de los administrados que reclaman de sus actuaciones. Sin embargo, ha requerido de esos mismos tribunales y en los mismos juicios, que resuelvan en su favor, en particular respecto a la excepción que interpone, como es el caso sublite.

Explica que la doctrina de los actos propios consiste en castigar como “inadmisibles toda pretensión contradictoria con comportamientos observados anteriormente por el mismo sujeto que hace valer dicha pretensión”; en tal sentido ha fallado uniformemente nuestra Corte Suprema de Justicia en reiteradas oportunidades.

Advierte que, aun así, el demandado en su contestación insiste que el caso de autos estaría prescrito. Tal hecho no es así por varias razones:

a) La acción constitucional para hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado no establece plazo de prescripción (Artículo 38° inciso 2° de la Constitución Política de la República).

b) El demandado no reconoce la pertinencia en este asunto de las reglas de responsabilidad contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, pues insiste en sostener una interpretación antojadiza y/o reduccionista no solo de las leyes que componen el ordenamiento jurídico interno, sino que también del marco regulatorio internacional de los Derechos Humanos.





Expone que de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un error ignorar el hecho que ésta ha regulado el deber de reparar el mal causado que pesa sobre todo Estado que ha violado los derechos fundamentales de sus habitantes. Al respecto, basta tener a la vista el artículo 63 de la citada Convención, junto con la enorme cantidad de jurisprudencia que, desde sus primeros fallos, viene dictando la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a la forma correcta de interpretar y aplicar dicho artículo. En nuestro medio, desde hace varios años existen precedentes jurisprudenciales que refuerzan esta misma idea.

Sostiene que la Corte Interamericana también ha aclarado que el artículo 63.1 de La Convención no remite al derecho interno para el cumplimiento de la responsabilidad del Estado, de manera que la obligación no se establece en función de los defectos, imperfecciones o insuficiencia del derecho nacional, sino con independencia del mismo (Caso Velásquez Rodríguez). De otra parte, se ha señalado que esta responsabilidad estatal surge sin necesidad de que exista falta o culpa por parte del agente, lo cual resulta lógico ya que indudablemente una violación de derechos humanos, por su naturaleza, supone dolo o al menos culpa estatal.

Agrega que sostener que el caso de autos está prescrito es erróneo toda vez que se construye sobre un supuesto teórico que afirma la desconexión total de las acciones civiles con las penales, esto es: que sería posible castigar a los responsables y al mismo tiempo dejar sin reparación a las víctimas. Al respecto, refiere jurisprudencia de la Iltma. Corte de Apelaciones en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil en delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado.

Expresa que la prescripción extintiva constituye una sanción o pena civil toda vez que el titular de un derecho que no solicita al órgano jurisdiccional su reconocimiento en el tiempo que el legislador contempla



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



verá extinguirse su acción para exigir su cumplimiento. En tal sentido, el profesor Carlos Ducci enseña que la interpretación estricta y/o restrictiva, que se funda en motivos lógicos o en el respeto a los derechos individuales, se aplica en primer término a las leyes penales, debiendo hacerse presente que la jurisprudencia ha dado el carácter de pena a las sanciones en general, más allá del campo estrictamente penal. Refiere que la evidente naturaleza sancionatoria del instituto de la prescripción extintiva impide que esta sea aplicada por analogía, con mayor razón cuando su aplicación analógica se contrapone a los principios que informan tanto el Derecho Público en general y el Administrativo en particular, así como - y muy especialmente - los que subyacen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En efecto, pretender integrar la ausencia de normativa que regule la prescripción extintiva en el caso sublite mediante la aplicación analógica de las normas del Código Civil, considerándolo como derecho común supletorio a todo el ordenamiento jurídico, resulta exagerado y desproporcionado, en tanto niega la distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, así como la particularidad de las relaciones jurídicas que cada uno de tales estatutos regula: El Derecho Privado regula las relaciones desde un plano de igualdad con plena autonomía de las personas para obligarse y cuyo fin es el bien particular en tanto su objeto es el intercambio de bienes. El Código Civil es supletorio al Derecho Privado, al que orienta. El Derecho Público, en cambio, regula la relación de los particulares frente al Estado, cuyo fin es el bien común basado en los principios de juridicidad y supremacía constitucional.

Añade que luego del advenimiento de la II Guerra Mundial, surge la necesidad de limitar el poder y arbitrariedad del Estado, modificando radicalmente la concepción de la soberanía estatal, limitando su ejercicio al respeto de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana,



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



dando vida al complejo normativo de los Derechos Humanos. De este modo, la evolución de las ciencias jurídicas ha permitido establecer principios y normas propias para determinadas materias, lo cual el mismo Código Civil reconoce en su artículo 4° al estipular que las disposiciones particulares “se aplicarán con preferencia a las de este Código”.

Arguye que la ausencia de norma expresa que regule la prescripción extintiva de las acciones de reparación por violación de los derechos humanos de las personas debe ser resuelta e integrada mediante la interpretación armónica de las normas y principios del Derecho Público tanto como del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, quedando proscrita la aplicación analógica de los artículos 2332, 2514 y 2515 del Código Civil, ya por su naturaleza ciertamente sancionatoria, ya por la contrariedad de los fines y postulados que informan al Derecho Privado y al Público, ya por la disparidad de las situaciones que se busca regular: mientras el Código Civil regula relaciones de tipo contractual vinculada a un negocio común o bien daños derivados de delitos o cuasidelitos civiles, aquí se está frente a delitos de la mayor gravedad, que importan una afrenta hacia la comunidad internacional en su conjunto, en contra de toda la humanidad. Así, al no existir una similitud en las situaciones fácticas no resulta viable la analogía que supone hechos de igual valor que implique iguales consecuencias jurídicas.

Hace presente que es bueno que el demandado sepa y acepte de una vez el principio jurídico reconocido por todas las sociedades democráticas de que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben, tanto en su investigación, en su sanción y en su reparación.

Hace presente otro pasaje dentro de la jurisprudencia de la Excm. Corte Suprema, la que ha permitido el avance de los criterios en relación a la imprescriptibilidad de la acción civil emanada de la comisión de crímenes



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



de Lesa Humanidad, adaptándolos a los estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que ha significado un merecido frescor y sosiego espiritual en la justicia material, a tantos familiares a víctimas del terrorismo de Estado.

#### IV. Derecho aplicable.

Explica que existe un debate dogmático sobre la naturaleza de la responsabilidad del Estado y el estatuto jurídico aplicable. Cualquier estatuto que se aplique llevará a la misma conclusión: la existencia de la responsabilidad del Estado, por hechos que causan daño y que los particulares afectados no tienen obligación jurídica de soportar tales daños. En un Estado de Derecho real el principio de la responsabilidad es de la esencia del mismo. Los daños causados por el Estado literalmente “se pagan”.

Señala que el derecho citado por las partes no es vinculante para el jurisdiscente. Este será el que soberanamente aplique el derecho al caso concreto. Ese derecho que se construye desde las normas constitucionales que conforman las bases de la institucionalidad hasta las legales, no olvidando las internacionales vinculantes para el Estado de Chile, a propósito del inciso 2º del artículo 5 de la Constitución Política.

#### V. Respecto a la Jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema.

Señala que respecto de la afirmación que realiza el demandado en relación a que la Corte Suprema ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la prescripción extintiva, si bien ello es cierto, la más reciente jurisprudencia de la Excma. Corte ha variado el criterio otorgándole el carácter de imprescriptibles a las acciones civiles que derivan de estos crímenes, concediendo así la correspondiente indemnización. Reitera la vasta jurisprudencia señalada en el escrito de demanda, la que ha zanjado la discusión sobre si procede la prescripción, determinando de forma





categoría que no procede, ahora avanzando en la discusión sobre si la cosa juzgada puede ser impedimento para la reparación cuando se ha fundado en un juicio donde se aplicó la prescripción, también señalando que no procede. Son más de 190 fallos de nuestro Máximo Tribunal, donde de manera constante se ha determinado la improcedencia de la prescripción extintiva de la acción civil en estos casos.

#### VI. En relación al monto de lo demandado.

Sobre cifras, manifiesta haber señalado un monto específico pues una demanda indemnizatoria exige pretensiones concretas. No hay dinero que supla el dolor experimentado por sus mandantes. Parece hasta de mal gusto tener que justificar el peso que se solicita, como de peor gusto cuestionarlo. En lo petitorio lo señaló, si al tribunal le parece excesivo lo pedido, señala que se condene a “la suma que S.S. disponga”.

#### VII. Respecto a los reajustes.

Sobre este punto, reitera lo expuesto en el libelo. En su consideración, una correcta aplicación del artículo 1557 en relación al artículo 1551 del Código Civil, normas aplicables supletoriamente al estatuto de responsabilidad extracontractual del Estado, determinaría que los reajustes e intereses aplican desde la fecha de interposición de la demanda.

**Con fecha 18 de abril de 2023, a folio 14,** la parte demandada evacuó el trámite de la duplica, ratificando la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación de la demanda, las que da por expresamente reproducidas y conforme a ellas pide el rechazo de la demanda.

Respecto de la excepción de cosa juzgada, indica que en la réplica se señala que, sin desconocer que ya existe una sentencia ejecutoriada previa donde existe triple identidad respecto de la acción impetrada en autos, que resultaría improcedente la aplicación de la cosa juzgada, en tanto



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



excepciones de derecho interno, en atención a que la materia de autos dice relación con acciones indemnizatorias fundadas en delitos de lesa humanidad, existiendo normas de derecho internacional que prevalecerían por sobre la institución de cosa juzgada.

Al respecto, señala que la cosa juzgada se considera como uno de los efectos de la sentencia, o como su específica eficacia, para que aquellos a quienes aprovecha el fallo “impidan, definitiva o irrevocablemente, todo pronunciamiento posterior, sea en el mismo u otro sentido, esto es, con idéntico o diverso contenido y en el mismo o en otro proceso (exceptio res iudicata), concurriendo los presupuestos, requisitos, condiciones y modos correspondientes y, muy en especial, la triple identidad de que trata el ya citado artículo 177 del Código de Procedimiento Civil chileno” (Hoyos H., Francisco, “Temas fundamentales de Derecho Procesal”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1987, p. 195).

Afirma que el demandante pretende restar eficacia absoluta y autoridad a la sentencia ejecutoriada dictada en un procedimiento anterior y obtener en un nuevo juicio un pronunciamiento favorable, concurriendo en ambas causas identidad en legal de personas, cosa pedida y causa de pedir.

Manifiesta que lo solicitado resulta del todo improcedente, sin perjuicio de las motivaciones que indican los actores, pues el mandato de una sentencia, una vez firme, no puede ser modificado o dejado sin efecto, salvo casos muy excepcionales como el recurso de revisión en materia penal, cuyo no es el caso.

Hace presente que, a mayor abundamiento, reconocer lo señalado por el demandante significaría ignorar la autoridad de los fallos que la Excma. Corte Suprema ha dictado en esta materia, desconociendo el valor jurídico de sus sentencias y en definitiva atentando en contra la certeza jurídica.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Refiere que en un fallo reciente, de fecha 14 de noviembre de 2019, la Excma. Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo deducido por los demandantes en contra de la sentencia dictada por la Iltna Corte de Apelaciones de San Miguel que acogió la excepción de Cosa Juzgada en un juicio seguido en contra del Estado por familiares de una víctima de violaciones a los Derechos Humanos.

Destaca que la Corte Suprema en algunas sentencias recientes ha sostenido que, sobre la base de un control de convencionalidad, debe dejar de aplicarse la normativa interna desconociendo la cosa juzgada por la existencia de una norma que exigiría la reparación. Así por ejemplo lo ha sostenido en la sentencia Rol N° 104.558-2020. Tal afirmación utiliza de un modo inadecuado el control de convencionalidad y olvida que este no puede ser invocado sin fijar con claridad y precisión sus contornos. Tal incertidumbre aconseja ser especialmente cautos al momento de inaplicar un precepto legal invocando una lectura parcializada de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Expresa que la correcta incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al ordenamiento interno no pasa por crear una especie de recurso de inaplicabilidad de precepto legal, ya no por inconstitucional, sino que por una pretendida contrariedad con el derecho internacional. Lo adecuado es observar el asunto a la luz de las normas en juego y compatibilizar los diversos ordenamientos sin sacrificar uno por los supuestos mandatos del otro.

Esgrime que si al conocer de esta causa el tribunal actúa de tal forma, podrá concluir que no puede simplemente inaplicarse las reglas de derecho interno que regulan la cosa juzgada porque esta es una institución que, también para el derecho internacional, ocupa un lugar central. No se trata entonces, sobre la base de un discutible control de convencionalidad que



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



tendría el efecto de inaplicar normas, de decidir que la cosa juzgada regulada en el derecho interno debe ser olvidada para proteger normas del derecho internacional. La fórmula de compatibilizar ambos ordenamientos es comprendiendo que también el derecho internacional reconoce, valora y protege la cosa juzgada. En consecuencia, sólo cabe acoger la excepción de cosa juzgada por concurrir la triple identidad que el legislador ha establecido.

Respecto de la excepción de preterición legal, reitera la alegación relativa a la improcedencia de la indemnización, por haber sido preteridos legalmente los demandantes, en calidad de hermanos de la víctima, y por haber recibido una reparación satisfactoria.

Sostiene que la Ley 19.123 constituyó un esfuerzo trascendental de reparación, pues hizo posible atender a la necesidad de reparar económicamente a los familiares más directos, mediante prestaciones en dinero -preferentemente en cuotas mensuales- con lo que permitió y permite que numerosas víctimas obtengan mes a mes una reparación monetaria, sin que por ello el Estado deje de cumplir con sus otras obligaciones de interés público. Esta forma de pago ha significado un monto en indemnizaciones dignas, que han permitido satisfacer económicamente el daño moral sufrido por muchos. Luego, para que ello fuera viable, se determinó una indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es, padres, hijos y cónyuge, pretiriendo al resto de las personas ligadas por vínculos de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactorias a éstos últimos, los que, no obstante haber sido descartados de pagos directos en dinero, se les consideró en diversos desagravios de carácter simbólico y en programas, especialmente de salud, para reparar el daño moral, razón por la cual, sin perjuicio de que no hayan tenido derecho a un pago en dinero por haber



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



sido preteridos legalmente, han obtenido reparación satisfactiva mediante las prestaciones médicas, educacionales y reparaciones simbólicas explicadas latamente al contestar la demanda.

Respecto de la excepción de prescripción, reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 “Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno” y que transcribió en sus principales argumentos en el escrito de contestación a la demanda.

Indica que en dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. En esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Afirma que la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Destaca la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, donde se pronunció respecto a la excepción de pago y de prescripción.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



**Con fecha 15 de mayo de 2023, a folio 19,** se recibió la causa a prueba, rindiéndose la que consta en autos.

**Con fecha 2 de octubre de 2023, a folio 42,** se citó a las partes para oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, a folio 1, comparece don Nelson Guillermo Caucoto Pereira, abogado, en representación de don Sergio Andrés Barra Rosales, don Enrique Antonio Barra Rosales, don Modesto Barra Rosales, don Ricardo Federico Barra Rosales, y doña Susana Ximena Barra Rosales; quien interpone demanda de indemnización de daños y perjuicios, en juicio ordinario, en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$500.000.000.-, correspondiendo \$100.000.000.- a cada uno de los demandantes, con ocasión de los crímenes cometidos respecto de su hermana, doña Jenny del Carmen Barra Rosales, ilícitos cometidos por agentes del Estado de Chile, o bien, en su defecto, a la suma que el tribunal considere en justicia; cantidad que deberá ser reajustada de acuerdo a la variación del IPC, desde la fecha de interposición de su demanda y el pago efectivo de la indemnización que se establezca, junto con los intereses legales correspondientes durante el mismo período, y las costas de la causa; todo ello conforme a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho previamente reseñados en la parte expositiva de este fallo.

**SEGUNDO:** Que, a folio 8, doña Ruth Israel López, Abogada Procuradora Fiscal de Santiago del Consejo de Defensa del Estado, por la parte demandada Fisco de Chile, contesta la demanda solicitando su rechazo, de acuerdo a los fundamentos de hecho y de derecho ya expresados en lo expositivo de esta sentencia.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



**TERCERO:** Que la parte demandante, a fin de acreditar los hechos en que funda su acción, acompañó los siguientes documentos al proceso, en forma legal y no objetados:

A folio 1:

1.- Certificado de nacimiento de Jenny del Carmen Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

2.- Certificado de nacimiento de Sergio Andrés Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

3.- Certificado de nacimiento de Enrique Antonio Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

4.- Certificado de nacimiento de Modesto Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

5.- Certificado de nacimiento de Ricardo Federico Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

6.- Certificado de nacimiento de Susana Ximena Barra Rosales, emitido con fecha 23 de enero de 2023 por el Servicio de Registro Civil e Identificación.

7.- Copia de certificado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos con fecha 23 de enero de 2023, que da cuenta que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación declaró la calidad de víctima de violación a los derechos humanos a Jenny del Carmen Barra Rosales, que según el informe es detenida desaparecida desde el 17 de octubre de 1977; y página 654 del tomo 2 del aludido Informe.

A folio 31:



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



8.- Copia de informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, elaborado por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 30 de noviembre de 2022, relativo a Enrique Antonio Barra Rosales.

9.- Copia de informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, elaborado por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 30 de noviembre de 2022, relativo a Modesto Barra Rosales.

10.- Copia de informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, elaborado por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 30 de noviembre de 2022, relativo a Ricardo Federico Barra Rosales.

11.- Copia de informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, elaborado por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 24 de agosto de 2022, relativo a Sergio Barra Rosales.

12.- Copia de informe psicológico evaluación de daño asociado a violencia política, elaborado por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza, del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos PRAIS Servicio de Salud Metropolitano Sur, con fecha 24 de agosto de 2022, relativo a Susana Ximena Barra Rosales.

13.- Copia de Norma Técnica N° 88 “Norma Técnica para la Atención de Personas Afectadas por la Represión Política Ejercida por el Estado en el periodo 1973 - 1990”, elaborada por el Ministerio de Salud.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



14.- Copia de sentencia de 29 de noviembre de 2018 en el caso “Órdenes Guerra y Otros vs. Chile”, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

15.- Copia de escrito de contestación del Estado de Chile, Caso N° CDH-2-2017/003 “Órdenes Guerra y Otros vs. Chile”, Corte Interamericana de Derechos Humanos.

16.- Sentencias de casación y reemplazo dictadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 9 de diciembre de 2019, en ingreso Rol N° 16.950-2019.

17.- Sentencias de casación y reemplazo dictadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 6 de diciembre de 2019, en ingreso Rol N° 18.179-2019.

18.- Sentencias de casación y reemplazo dictadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 24 de diciembre de 2021, en ingreso Rol N° 13.877-19.

19.- Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 13 de junio de 2018, en ingreso Rol N° 8105-18.

20.- Sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema con fecha 26 de febrero de 2019, en ingreso Rol N° 31363-18.

A folio 32:

21.- Sentencias de casación y reemplazo dictadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 14 de junio de 2022, en ingreso Rol N° 149.250-20.

22.- Sentencias de casación y reemplazo dictadas por la Excma. Corte Suprema con fecha 20 de febrero de 2023, en ingreso Rol N° 862-2022.

**CUARTO:** Que con fecha 6 de septiembre de 2023, a folio 40, la parte demandante rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de los testigos Claudio Ives Quintanilla Campos y José Mariano Valenzuela Ávila, quienes, bajo promesa de decir verdad y legalmente juramentado, respectivamente, y sin tachas, expusieron lo siguiente.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Don Claudio Ives Quintanilla Campos, al punto de prueba N° 2 “Existencia del daño moral de Sergio Andrés Barra Rosales, Enrique Antonio Barra Rosales, Modesto Barra Rosales, Ricardo Federico Barra Rosales y, Susana Ximena Barra Rosales, por la desaparición de su hermana Jenny del Carmen Barra Rosales” responde: “Conozco a la familia Barra Rosales a partir del conocimiento de su madre, desde el año 1987 en una huelga de hambre por los últimos desaparecidos de la dictadura, y de ahí conocí junto a otras personas conocía de la existencia de la desaparición de su hija Jenny Barra Rosales, no teníamos idea y nos encontramos en esta movilización de exigencia de verdad en realidad por los Detenidos Desaparecidos, y desde allí surgió este conocimiento y empezamos a trabajar el tema de memoria, justicia y verdad en la comuna de San Bernardo. Esto nos llevó a formar una comisión de DDHH en la I.M. de San Bernardo, en el año 1993, que contaba con el apoyo de los concejales y alcalde de la época, eso permitió un montón de movilizaciones en torno al tema de Jenny. Bueno en particular soy hijo de un ejecutado político del Cerro Chena de San Bernardo que fue compañero de concentración. De ahí surgió esta posibilidad de reunir y organizar a más gente en torno a estas demandas y esto es lo que en la práctica puedo señalar de la existencia no tan sólo del daño moral sino también del daño psíquico y físico que llevó a la muerte después de tantos años de búsqueda a la señora Laurisa Rosales la madre de Jenny. Con esto ratifico la existencia de los daños morales, físicos y psíquicos, emocional es todo lo que significa tener una hija desaparecida en el caso de esta familia y de sus hermanos”.

Repreguntado para que precise y describa sobre cuál es el daño mental, físico y psíquico al que ha hecho referencia, responde: “Bueno fundamentalmente son depresiones, tratamientos médicos y psiquiátricos por parte de lo que yo conozco, de parte de la señora Laurisa y de Susana a



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



quien yo conozco que ha llevado esta causa con mucha fuerza, y con quien nos encontramos en las movilizaciones”-

Para que precise cuáles son estos tratamientos médicos y qué era lo que le comentaban en las movilizaciones, responde: “Aparte de la medicación en base a pastillas y todo eso, comentaban acerca de los talleres que organizaba la agrupación de Detenidos Desaparecidos, a la cual todavía pertenece doña Susana Barra Rosales, pero participaba activamente con su madre en talleres de terapia al interior de la organización. Eso es sólo lo que yo conozco sobre los tratamientos médicos”.

Para que diga si conoce las circunstancias respecto de los otros hermanos, responde: “No tengo, solamente conocí a uno, a Ricardo Barra Rosales que participaba activamente en los años 90 en las movilizaciones también y en la agrupación de Detenidos Desaparecidos. De los demás hermanos no tengo mayor referencia, los he visto de vista, pero no hay mayor conocimiento de sus vidas”.

Para que diga si sabe cuánto tiempo estuvieron en tratamiento doña Susana Barra y doña Laurisa Rosales, responde: “Desconozco esa información”.

Don José Mariano Valenzuela Ávila, al punto de prueba N° 2, responde: “Me crie junto a mi familia en la cooperativa de viviendas Paula Jaraquemada, en los años 73-74, por esos años, y en ese contexto fui vecino de la familia Barra Rosales, constituida por los padres y de todos los hermanos Barra Rosales. En ese contexto me enteré de la desaparición de Jenny Barra Rosales, y pude apreciar a través de los años del daño moral y económico que sufrió la familia como consecuencia del hecho señalado. Pude apreciar el daño emocional que sufrieron cada uno de los hermanos producto de la detención de Jenny. En alguna oportunidad como vecino del barrio me tocó en pascua por ejemplo, ir a saludar a la familia y pude notar



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



la tristeza, la angustia de los integrantes de este grupo familiar, por quien faltaba. Por la cercanía de mi edad, participaba también de la iglesia y tuve contacto con los hermanos menores, Susana y Ricardo, en donde la ausencia de Jenny, significó, ya que era como una madre para ellos, se preocupaba de sus juegos, de sus estudios, ya que Jenny era una estudiante de la Universidad Católica y los padres eran obrero panificador y tenía poca educación y estudios, entonces Jenny era un pilar fundamental sobre todo para sus hermanos menores. Por otra parte, también pude constatar que hubo discriminación hacia la familia por el hecho de ser familiares de una Detenida Desaparecida, particularmente Ricardo Barra que era prácticamente adolescente, para tener respuestas de la desaparición de su hermana, tuvo que participar muy tempranamente de la única institución que daba ayuda a la gente perseguida, que era la Vicaría de la Solidaridad. El hecho de participar de la vicaría le significó hostigamientos y seguimientos por parte de agentes del estado, lo que le ocasionó madurar muy tempranamente debiendo postergar sus estudios e iniciar conjuntamente su vida laboral a muy temprana edad 17-18 años. Por otra parte, el resto de los hermanos me consta que tuvieron que enfrentar problemas derivados de la cercanía con su hermana Detenida Desaparecida y me consta que uno de ellos que se llama Modesto, quien debió dejar Santiago y debió ir al norte a Calama a buscar trabajo por un tiempo prolongado por ser objeto de seguimiento y persecución, por lo menos así lo sentía él, y considerando que su integridad y la de su familia estaba en riesgo. Fundamentalmente es esto, y principalmente el daño es emocional y de alguna manera limitó la expectativa de desarrollo personal de cada uno de los hermanos”.

Repreguntado para que precise sobre el daño económico sufrido por la familia y al que hizo referencia, responde: “En primer lugar, Jenny Barra



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



estaba en el último año de enfermería, por lo tanto era esperable que una vez titulada iniciara su vida laboral y pudiera ayudar significamente a aumentar el nivel de ingresos de la familia, considerando que su padre era un obrero panificador. Por otra parte, producto del estigma de ser familiar de un Detenido Desaparecido, los hermanos tuvieron dificultades al momento de conseguir trabajo, y en ese sentido señalé que Modesto debió salir de Santiago e ir a buscar trabajo al norte, a Calama, porque sentía ser objeto de persecución. Por otra parte, cada uno de sus hermanos enfrentó dificultades al momento de conseguir trabajo ya que, en ese tiempo de dictadura, a los familiares de perseguidos políticos se les tenía vetado el ingreso a la administración pública, debiendo ejercer únicamente en el sector privado y en el rubro de la construcción”.

Para que precise en qué sentido hubo discriminación hacia la familia, responde: “Tal como señalé anteriormente vivíamos en una comunidad que se llamaba la población Paula Jaraquemada y en ese contexto ellos veían que había un distanciamiento de muchos vecinos hacia ellos por el hecho de ser familiares de una perseguida por la dictadura, en la relación cotidiana muchos vecinos evitaban relacionarse. En lo laboral también era complejo obtener trabajo siendo familiares de una perseguida política. Los grupos empresariales eran reducidos sobre todo en el rubro de la construcción por lo tanto la información de ser familiar de un Detenido Desaparecido es conocido y eso genera que al buscar trabajo, éste les sea negado, y ahí sufren discriminación, es decir tanto en el área pública como privada era información que es conocida”.

Para que precise si puede describir por qué llega a la conclusión de que tenían un daño emocional al ver a los demandantes, responde: “Primero noté con las personas que son más cercanas por edad, que hubo un cambio de objetivos personales y afectivos, y eso lo gatilló la desaparición



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



de Jenny y eso significó el empezar a golpear puertas para saber dónde estaba su hermana descuidando y postergando sus estudios. Se veía a Ricardo y a Susana que nunca más les vi una sonrisa, se sentían perseguidos, lo que pudo ser cierto o no, pero se sentían inestables e inseguros, y toda su vida giraba en torno a la desaparición de su hermana, postergando aspectos importantes de su vida personal, como son estudiar, desarrollar actividades recreativas, deportes, porque todas esas cosas fueron postergadas porque su objetivo central de vida era obtener una respuesta de su hermana. Por otra parte, las veces que me tocó visitar a la familia sobre todo en periodos de fiestas, siempre estaba la pena profunda la angustia de la madre y hermanos por tener alguna noticia de Jenny. Pasó de ser una familia con futuro, con esperanza y alegría, a ser una familia triste, insegura, melancólica y depresiva”.

**QUINTO:** Que con fecha 4 de octubre de 2023, a folio 43, fue recibido oficio Ord. DSGT N° 4792-16786 proveniente del Instituto de Previsión Social, que informa respecto de beneficios de reparación de la causante Ley Rettig doña Jenny del Carmen Barra Rosales, y que Sergio Andrés, Enrique Antonio, Modesto, Ricardo Federico y Susana Ximena, todos de apellidos Barra Rosales, no han recibido beneficios de reparación de las Leyes N° 19.123 y 19.980 por cuanto son hermanos de Jenny Barra Rosales, parentesco que no está considerado con beneficios en las leyes referidas.

**SEXTO:** Que a fin de resolver el asunto sometido a conocimiento del tribunal, en primer lugar se deben establecer las circunstancias de la desaparición de doña Jenny Barra Rosales; en particular, si existió participación de agentes del Estado y si se encuentra reconocida como víctima de violación a los derechos humanos por algún órgano del Estado o



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



por alguno de los informes de las Comisiones creadas, por éste, para dicho efecto.

**SÉPTIMO:** Que, a este respecto, fue acompañada a folio 1 copia de certificado emitido por la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, que da cuenta que doña Jenny del Carmen Barra Rosales fue reconocida como víctima de violación a los derechos humanos en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, según el cual es detenida desaparecida desde el 17 de octubre de 1977.

Agrega el documento referido que según lo consignado en el Informe, doña Jenny Barra Rosales desapareció en las circunstancias que se detallan en su tomo 2, página 654, esto es:

“El 17 de octubre de 1977, luego de salir de la casa de una amiga, alrededor de las 21:30 horas, fue detenida la estudiante y militante del MIR, Jenny del Carmen Barra Rosales.

El día 19 de octubre de 1977, al salir del Jardín Infantil G-27, de la población Teniente Merino, donde trabajaba, fue detenido por un grupo de agentes de civil, el joven Hernán Santos Pérez Álvarez. Este último, militante del PS y amigo de Jenny Barra, fue golpeado con manoplas e introducido a viva fuerza a un vehículo. El secuestro fue presenciado por numerosos testigos, quienes lograron registrar la patente de uno de los vehículos utilizados. En el interior de dicho vehículo fue vista, acompañada de tres sujetos, Jenny Barra estando ya detenida.

La investigación judicial permitió aclarar que la patente del vehículo utilizado en estos hechos, correspondía a una patente de gracia, otorgada por la Municipalidad de Renca al organismo denominado Dinar que tenía registrado domicilio en el Edificio Diego Portales. Estos antecedentes, agregados a otras evidencias, le permiten a esta Comisión llegar a la convicción de que la detención y desaparición de Jenny Barra y de Hernán



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



Pérez fue practicada por agentes de la DINA, quienes violaron así sus derechos humanos”.

**OCTAVO:** Que, de acuerdo a lo señalado precedentemente, se tiene por acreditado que doña Jenny del Carmen Barra Rosales fue víctima de detención y desaparición a manos de agentes del Estado de Chile y víctima, en consecuencia, de la violación de sus derechos humanos, de acuerdo a los hechos y circunstancias establecidos en lo precedente.

Sin perjuicio de lo anterior, no huelga señalar que el demandado Fisco de Chile no controvertió expresamente la participación de sus agentes en la desaparición de doña Jenny Barra Rosales.

**NOVENO:** Que, estando acreditadas las circunstancias señaladas en el considerando anterior, corresponde dilucidar y resolver las alegaciones sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado en su contestación.

**DÉCIMO:** Que, en primer término, corresponde pronunciarse respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por la demandada.

Funda dicha defensa en que existe sentencia definitiva ejecutoriada en la materia respecto de los demandantes, quienes ya ejercieron una acción de indemnización de perjuicios por los mismos hechos. Así, en la causa “Rosales con Fisco de Chile”, conocida por el 26° Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol C-3302-2003, se dictó sentencia definitiva que acogió la prescripción de la acción indemnizatoria, confirmada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y rechazada la casación en el fondo deducida en su contra, encontrándose firme y ejecutoriada.

Esgrime que en dicho proceso civil los actores dedujeron su acción en contra del Fisco de Chile por el daño moral sufrido como consecuencia del secuestro y asesinato de su hermana, doña Jenny Barra Rosales, por parte de agentes del Estado, hecho ocurrido en el año 1977. Añade que de los hechos expuestos en dicho libelo, puede apreciarse que concurren las



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



mismas partes, causa de pedir y objeto pedido, ya que los actores demandaron al Fisco por la supuesta responsabilidad extracontractual imprescriptible y objetiva de éste por el secuestro y desaparición de su hermana.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, por su lado, los actores solicitan el rechazo de la excepción, en virtud de la imprescriptibilidad de las acciones civiles que emanan de crímenes contra la humanidad, haciendo referencia al cambio jurisprudencial en los Tribunales Superiores chilenos en relación a la aplicación de la prescripción de las acciones civiles emanadas de la comisión de crímenes de lesa humanidad y lo que ha establecido el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos en relación a la prescripción de la acción civil, entre otros argumentos.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que resulta necesario recordar que el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada.”

A su turno, el artículo 177 del mismo cuerpo legal establece que “La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya:

- 1° Identidad legal de personas;
- 2° Identidad de la cosa pedida; y
- 3° Identidad de la causa de pedir.

Se entiende por causa de pedir el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio.”

**DÉCIMO TERCERO:** Que, si bien las partes se encuentran contestes en la existencia de la causa tramitada ante el 26° Juzgado Civil de Santiago, para efectos de analizar en detalle si concurren los presupuestos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



de la cosa juzgada alegada, consta en autos que el Fisco no rindió prueba alguna para dichos efectos, cuestión que impide examinar la procedencia de la excepción; debiendo, por ende, ser rechazada.

**DÉCIMO CUARTO:** Que, a continuación, la demandada opuso la alegación de improcedencia de las indemnizaciones dinerarias demandadas por preterición legal de los demandantes y, además, por haber sido ya reparados mediante un conjunto de reparaciones de diverso orden, incluyendo las simbólicas y de beneficios de salud, a través del programa PRAIS.

**DÉCIMO QUINTO:** Que el Estado de Chile ha hecho un formal reconocimiento de una serie de hechos constitutivos de violación de los derechos humanos acaecidos durante el régimen militar, a través del mensaje que creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

Al respecto, la ley 19.123 y sus modificaciones, y las reparaciones simbólicas a que alude el demandado, constituyen más bien un beneficio de carácter social tendiente a cumplir, además, con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, mas no una indemnización de daño material y/o moral sufridos por los familiares de las víctimas de violación a los derechos humanos, pues no aparece en la determinación de su monto que se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar el sufrimiento por la pérdida de un familiar y, además, la acción indemnizatoria de estos autos está reducida al daño moral de los actores, el cual no sólo lo sufren los padres e hijos de la víctima, sino que también el entorno familiar más amplio que ha padecido por su pérdida, todo lo cual lleva a desestimar las alegaciones deducidas por la parte demandada.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, seguidamente, cabe hacerse cargo de la excepción de prescripción extintiva civil opuesta por el Fisco de Chile.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, en este sentido, la Asamblea General de Naciones Unidas, por Resolución N° 2.391 (XXIII), de 26 de noviembre de 1968, en vigor desde el año 1970, aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad”, la que dispuso:

“Considerando que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuren entre los delitos de derecho internacional más grave.

Convencidos de que la represión efectiva de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales, y puede fomentar la confianza, estimular la cooperación entre los pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales.

Advirtiendo que la aplicación a los crímenes de guerra y a los crímenes de lesa humanidad de las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios suscita grave preocupación en la opinión pública mundial, pues impide el enjuiciamiento y castigo de las personas responsables de esos crímenes.

Reconociendo que es necesario y oportuno afirmar en derecho internacional, por medio de la presente Convención, el principio de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y asegurar su aplicación universal.

Convienen en lo siguiente:

Artículo 1º: Son imprescriptibles:

a) Los crímenes de guerra, según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de derecho internacional de Núremberg confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra de 1949.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



b) Los crímenes de lesa humanidad. Cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz según la definición del Estatuto del Tribunal de Núremberg, los principios de Derecho Internacional de Núremberg y confirmadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el apartheid y el genocidio.”

A continuación, el artículo 2º de este instrumento declara que la Convención se aplica, sin distinción, a las autoridades del estado y a particulares, ya sea que hayan participado como autores, cómplices o hayan incitado directamente a la perpetración de esos crímenes y cualquiera sea el grado de desarrollo.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que, con posterioridad, en el año 1973, la misma Asamblea General aprobó la Resolución N° 3.074 (XXVIII), de fecha 3 de diciembre de 1973, “Principios de cooperación internacional para el descubrimiento, el arresto, la extradición y el castigo de los culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, en la que señala lo siguiente:

“Los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, dondequiera y cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, serán objeto de una investigación y las personas contra las que existan pruebas de culpabilidad en la comisión de tales crímenes serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”.

**DÉCIMO NOVENO:** Que, en este sentido, se debe tener presente que si bien la citada Convención no ha sido ratificada por el Estado de Chile, surge en la actualidad con categoría de norma de ius cogens, o principios generales del derecho penal internacional, cuya obligatoriedad en derecho interno se encuentra prescrita por la Constitución Política de la República (artículo 5, inciso segundo), de modo tal que el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de los



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



crímenes de guerra, así como el aseguramiento objetivo y expreso de los derechos humanos resulta indiscutible e imperativo para los tribunales nacionales.

A mayor abundamiento, siendo nuestro país un Estado Parte de la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra obligado a cumplir de buena fe las resoluciones de la Asamblea General.

**VIGÉSIMO:** Que, además, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos -artículos 4º y 5º- como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas -artículos 7 al 10- ratificado por Chile e incorporado a su derecho interno, prohíben en la práctica los crímenes contra la humanidad.

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Que, en relación con la supremacía de los tratados internacionales sobre el derecho interno, es preciso hacer constar que la modificación al antes citado artículo 5º de la Constitución Política de la República tuvo por objeto precisamente reforzar la protección de los derechos humanos, al disponer como deber de los órganos del Estado, respetar y promover tales derechos.

**VIGÉSIMO SEGUNDO:** Que cabe reiterar que la presente acción es de carácter reparatoria por derivar de la violación a los derechos humanos en crímenes de lesa humanidad, la que se rige por preceptos del derecho internacional que consagran la imprescriptibilidad, la que debe regir tanto en el ámbito penal como en el civil.

De seguir la tesis del demandado, esto es, aplicar a este caso la prescripción del derecho privado, implicaría permitir que el Estado evitara cumplir su deber y se negaran derechos fundamentales, como la vida e integridad física, por quien, como se señaló precedentemente, es el constitucionalmente obligado a resguardarlos, lo que lleva a rechazar la excepción de prescripción.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



**VIGÉSIMO TERCERO:** Que, establecido lo anterior y rechazada la excepción de prescripción, habrá de emitirse pronunciamiento respecto de los perjuicios demandados, los cuales los actores hacen consistir en daño moral, el que se avalúa en la suma total de \$500.000.000.-, a razón de \$100.000.000.- por cada demandante.

**VIGÉSIMO CUARTO:** Que, en cuanto al daño moral demandado, ha de señalarse que a pesar de su naturaleza particular, debe ser probado por quien lo reclama, toda vez que éste constituye un presupuesto para el origen de la responsabilidad civil, y por tanto, aquel que intente beneficiarse de la concurrencia de la misma, tendrá la carga probatoria de demostrar su existencia.

Así, la indemnización del daño moral requiere que el mismo sea cierto, vale decir, que sea real y no hipotético, el que deberá ser demostrado por los medios de prueba legalmente establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el daño moral consiste, equivale y tiene su fundamento en el sufrimiento, dolor o molestia que el hecho ilícito ocasiona en la sensibilidad física o en los sentimientos o afectos de una persona. Se toma el término dolor en un sentido amplio, comprensivo del miedo, la emoción, la vergüenza, la pena física o moral ocasionado por el hecho dañoso.

También puede ser entendido, como algunos autores lo sostienen, como un menoscabo de un bien no patrimonial, en cuanto dolor, pesar, angustia y molestias psíquicas que sufre una persona en sus sentimientos, consecuencias del hecho ilícito; un hecho externo que afecta la integridad física o moral del individuo.

**VIGÉSIMO QUINTO:** Que, en orden a acreditar su existencia y evaluación, los demandantes acompañaron a folio 1 sus respectivos certificados de nacimiento junto al certificado de nacimiento de doña Jenny



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGEXT



del Carmen Barra Rosales, instrumentos que dan por acreditado el parentesco que mantienen los actores con esta última, esto es, hermanos.

**VIGÉSIMO SEXTO:** Que, en el mismo orden de ideas, a fin de acreditar el daño moral alegado, los demandantes se valieron de prueba documental, consistente en copias de informes psicológicos de evaluación de daño asociado a violencia política, emitidos en el marco del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, acompañados a folio 31.

Respecto de cada uno de los actores, se concluye por el psicólogo Miguel Ángel Varas Mendoza que “Existe un daño asociado a causa del evento represivo que ha permanecido en (los demandantes) y su familia en relación a ser víctima de violencia física, psicológica y su posterior ejecución de su hermana Jenny Barra Rosales. Las secuelas de las vulneraciones en su familia se han extendido desde las percepciones de cada miembro de la familia, lo que generó conductas de desorganización familiar y efectos de traumatización extrema y trauma transgeneracional en el núcleo familiar a causa de la violencia ejercida por instituciones del Estado en dictadura militar”.

**VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Que, valorada la prueba anterior de conformidad con la regla dispuesta en el artículo 346 N° 3 del Código de Procedimiento Civil, y teniendo en especial consideración la gravedad del hecho ilícito, así como sus consecuencias y las circunstancias en que los hechos acontecieron, ha de tenerse por suficientemente acreditado el daño moral alegado, regulando esta Juez la indemnización por concepto de daño moral prudencialmente en la suma de \$15.000.000 para cada uno de los demandantes.

Que en cuanto a la alegación de la parte demandada, en orden a estimar que para la regulación del daño moral se consideren los pagos



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



recibidos por las leyes de reparación, será desestimado, por cuanto según consta en el oficio del Instituto de Previsión Social de folio 43, los señores Sergio Andrés, Enrique Antonio, Modesto, Ricardo Federico y Susana Ximena, todos de apellidos Barra Rosales, no han recibido beneficios de reparación de las Leyes N° 19.123 y 19.980 por la causante Rettig doña Jenny del Carmen Barra Rosales, por cuanto son hermanos de ésta, parentesco que no está considerado con beneficios en las leyes ya referidas.

No obstante lo anterior, es necesario hacer presente que en la eventualidad de existir dichos pagos, estos corresponden a asignaciones entregadas en razón de los reconocimientos efectuados a las víctimas afectadas por violaciones a los derechos humanos, mas no una indemnización de daño moral sufrido por las mismas, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios y personales de quienes han debido soportar los sufrimientos y consecuencias de los actos de los que se trata.

**VIGÉSIMO OCTAVO:** Que, en lo referente a la reajustabilidad de la indemnización por daño moral, ésta se reajustará de conformidad a la variación que experimente el I.P.C desde el día en que la presente sentencia quede ejecutoriada y hasta el momento del pago efectivo, por cuanto el daño moral es evaluado por el juez en la sentencia, de ahí que las perniciosas consecuencias de la desvalorización monetarias sólo pueden empezar a producirse desde la fecha de la sentencia que regula el daño en comento.

**VIGÉSIMO NOVENO:** Que, respecto de los intereses, las sumas contempladas en lo resolutivo del fallo devengarán el interés corriente desde la fecha en que la sentencia quede firme o ejecutoriada y hasta la época de su pago efectivo.



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT



**TRIGÉSIMO:** Que la restante prueba rendida y no analizada en forma pormenorizada en nada altera lo que se ha resuelto en lo precedente.

Y atendido lo antes razonado y lo dispuesto en los artículos 47 y siguientes 1437, 1698 y 1702 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 341, 342, 346 y 384 del Código de Procedimiento Civil, Constitución Política de la República, Convención Americana de Derechos Humanos, Convenio de Ginebra de 1949 y Ley 19.992, se declara:

I.- Que se acoge parcialmente la demanda interpuesta con fecha 30 de enero de 2023, a folio 1, y se condena al Fisco de Chile a pagar a cada uno de los demandantes, a título de daño moral, la suma de \$15.000.000, más los reajustes e intereses reseñados en los motivos 28º y 29º del presente fallo.

II.- Que cada parte soportará sus costas, por no haber resultado totalmente vencido el demandado.

Regístrese y notifíquese.-

Pronunciada por María Soledad Jorquera Binner, Juez Titular.-

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, once de Julio de dos mil veinticuatro.**



Este documento tiene firma electrónica  
y su original puede ser validado en  
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: CXPCXXGCXT